

**AGENDAS UNIVERSITARIAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS
CIENCIAS SOCIALES ARGENTINAS: ESTRUCTURA
TEMÁTICA-DISCIPLINAR Y MULTI-ESCALARIDAD
GEOGRÁFICA**

Flavia Cecilia Prado

DOI: 10.54871/1lce212p

Introducción

El interés por la producción científica y tecnológica desarrollada en universidades y agencias de investigación se ha renovado en las últimas décadas en diversas latitudes del mundo, pues tanto gobiernos e instituciones civiles como la opinión pública y actores internacionales ven en estos espacios posibilidades y potencialidades no solo para mejorar la calidad de la investigación básica, aplicada o el desarrollo experimental, sino también para aprovechar oportunidades del medio socio-productivo, ampliar márgenes de inclusión social o bien cosechar mayores cuotas de capital económico, social o propiamente científico, entre otras razones.

En este marco, el campo científico-universitario argentino reviste un interés analítico particular. Varios autores (Beigel 2018; Bekerman 2016; Oregioni y Sarthou 2013; Unzué y Emilliozi 2017; entre otros) han dado cuenta de la etapa expansiva y progresiva experimentada por sus capacidades de investigación con posterioridad a la crisis nacional y estructural de 2001-2002, mediante la recuperación de los niveles de inversión en investigación más desarrollo [I+D] y correlativa inyección de recursos públicos en la materia, observable en la ampliación del sistema de becas, fortalecimiento de la política de incorporación de investigadores/as a universidades y organismos científicos, así como la consolidación de las carreras de posgrado, entre otras.

En tal sentido, aunque con ciertos vaivenes en los últimos años, el campo científico-universitario nacional viene atravesando una etapa de crecimiento significativo en la que consolidó su matriz pública. En efecto, las capacidades de investigación científica del país están sostenidas, fundamentalmente, por recursos del Estado y las principales instituciones destinatarias del presupuesto para el desarrollo de las labores de I+D lo constituyen el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET] y las universidades nacionales. Ambos ámbitos constituyen un espacio más o menos articulado y

fuertemente institucionalizado, pero a la vez, estructuralmente heterogéneo. Las asimetrías y desigualdades existentes, son resultado del devenir histórico del campo, caracterizado por “expansiones y contracciones, mayor o menor permeabilidad de políticas científicas nacionales o de criterios internacionales/universales, diversas culturas evaluativas, modos de producción y circulación del conocimiento vinculados a las disciplinas e instituciones” (Bekerman, 2016, p. 40), que fueron delimitando perfiles institucionales diferentes, como veremos en las páginas que siguen.

Dada su relevancia en el seno del campo científico-universitario y especialmente en materia de producción de conocimientos, en este trabajo focalizaremos en las universidades nacionales, aunque evidenciando algunas de sus articulaciones con el CONICET. El escrito avanzará mostrando los resultados de una investigación centrada en diez instituciones universitarias de gestión estatal del país, que fueron seleccionadas de forma *ad hoc* según criterios de antigüedad, emplazamiento geográfico y diversidad institucional. Conforme al planteo de Bianco y Sutz (2005), consideramos que la producción de conocimiento es una actividad colectiva, que se organiza en espacios institucionales y se halla moldeada por características disciplinares.

En tal sentido, y procurando aportar a la reflexión general sobre el rol de la investigación en y desde las ciencias sociales argentinas, el lente analítico del trabajo se concentra en torno a los diferentes proyectos de investigación del área disciplinar desplegados en dichas instituciones. Del análisis de estos proyectos, sus temáticas de abordaje y *abstract*, así como la auto-adscripción disciplinar de sus directores/as, se han podido indagar precisamente las *agendas* de investigación de las universidades públicas bajo estudio, entendiendo que constituyen un espacio de análisis de características meso o de tipo intermedio, situadas entre el quehacer científico de cada docente-investigador/a (ubicados a nivel micro) y la dinámica macro institucional-contextual. Respecto a ello, nos preguntamos: ¿cómo se configuran los proyectos de investigación de las ciencias sociales en las universidades argentinas?, y ¿qué modalidades endógenas y exógenas de acreditación promueven las instituciones? Adicionalmente, indagamos: ¿cómo se estructuran sus agendas de investigación en términos geográfico-disciplinares? Es decir, ¿cuáles son los diferentes espacios disciplinares intervinientes?, ¿cuáles son sus campos de aplicación?, ¿qué temas, problemas o líneas de investigación están

siendo abordadas en las investigaciones de ciencias sociales?, y ¿cuáles sus escalas geográficas de implicación?

Enmarcado en el Centro de Estudios de Circulación del Conocimiento [CECIC], una plataforma colectiva de investigación con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, la propuesta epistemológica de abordaje se inserta dentro de la línea de estudios sobre producción y circulación de conocimientos, planteándose desde y más allá de la teoría bourdiana de los campos sociales (Bourdieu y Wacquant, 1995). Si bien parte de reconocer las categorías analíticas centrales de la sociología reflexiva y su “imperialismo de lo universal” (Bourdieu, 2009) junto a las nuevas miradas críticas sobre la dependencia académica (Gingras 2016; Guédon 2011; Alatas 2014; entre otros), abre un fluido diálogo con el enfoque de la “circulación multiescalar del conocimiento” (Beigel 2019 y 2018) y con el campo de los “estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad” (Vessuri y Canino 2007; Kreimer y Thomas 2004, etc.), procurando contribuir a reconocer las diversas formas y múltiples escalas geográficas en que se produce y transita el conocimiento científico, focalizando en Argentina en tanto centro científico periférico y, específicamente, en las universidades nacionales.

En esta dirección, se han articulado diferentes accesos metodológicos. Además de normativas y documentos institucionales —de autoevaluación, evaluación externa, de gestión interna— de las universidades bajo estudio, para el análisis empírico se han sistematizado dos grandes bases de datos con información primaria, buscando reconocer sus particularidades institucionales de investigación en el ámbito de las ciencias sociales: una que contabiliza un total de setecientos noventa y dos proyectos de investigación acreditados en dicha área disciplinar y ejecutados en el seno de las instituciones seleccionadas para el estudio al año 2020 y otra relativa a los setecientos treinta y tres directores/as de dichos proyectos, dando cuenta de sus características socio-demográficas y académicas. Adicionalmente, con el propósito de (re) conocer el modo en que se estructuran las agendas universitarias de investigación científica, enfatizando en el caso particular de las ciencias sociales, se ha instrumentado el denominado Manual de Cuyo, conformado por un set de indicadores analíticos sobre las capacidades de investigación de las universidades, que coadyuvará

a (re)conocer la multiescalaridad geográfica, diversidad de campos temáticos y abordajes interdisciplinarios en las agendas investigativas de las ciencias sociales.

Entre los principales hallazgos del trabajo, veremos que las universidades cuentan con un sólido sistema interno/autónomo de acreditación de proyectos de investigación, aunque diferencialmente instrumentan como complemento otras fuentes de financiamiento provenientes de organismos nacionales. En materia de las agendas de investigación en ciencias sociales, hay predominancia de ciertas disciplinas por sobre otras, destacándose los casos de economía y negocios y ciencias de la educación. Adicionalmente, manifiestan una fuerte orientación hacia campos temáticos relativos a ciencia y cultura, desarrollo socio-económico y servicios y la promoción general del conocimiento, a la vez que el abordaje de temáticas locales-nacionales y estudios transversales constituyen sus rasgos distintivos más interesantes.

Aspectos conceptuales

La producción de conocimientos en las comunidades periféricas: el campo científico-universitario argentino entre la autonomía y la dependencia académica

La noción de campo, devenida del ámbito de la sociología reflexiva y especialmente de la mano de Pierre Bourdieu, constituye un punto de partida relevante para este estudio en tanto demarca un espacio social y cultural como foco analítico. Según Gutiérrez (2005) conlleva cierta direccionalidad en la investigación empírica y en sus vastos estudios, dicho autor ha examinado el campo cultural, universitario y científico, entre otros. Desde su óptica, todo campo es un microcosmos del espacio social nacional/global que desarrolla lógicas internas de funcionamiento (incluyendo mecanismos de consagración, validación y reproducción) que a su vez guardan autonomía respecto de las de otros campos.

El campo científico en particular es un espacio de fuerzas y luchas entre instituciones y agentes particulares por la apropiación/acumulación de mayores cuotas de capital científico validado nacional y transnacionalmente por pares académicos (Bourdieu, 2003). Una de sus características fundamentales es, precisamente su autonomía relativa, entendiendo que las luchas allí desarrolladas responden a

una lógica interna, pero también las luchas externas (que pueden ser económicas, políticas o sociales) son determinantes en su devenir.

Hablar de autonomía relativa supone, por un lado, analizar las prácticas en el sistema de relaciones específicas en que están insertas, es decir, según las leyes de juego propias de cada campo [...] Por otro lado, supone la presencia de los demás campos que coexisten en el espacio social global, cada uno de ellos ejerciendo su propia fuerza (Gutiérrez, 2005, p. 14).

Referirse a la cuestión de la autonomía de las instituciones, disciplinas, agentes de educación superior y organismos de investigación es un asunto complejo que lleva a reflexionar sobre los grados de interacción con los poderes gubernamentales, empresariales, de sectores sociales-productivos o de otros centros de producción de conocimientos locales, nacionales o transnacionales.

En el caso de América Latina, los organismos de ciencia y especialmente las universidades públicas, constituyen los principales ámbitos de producción de conocimiento y cobijan, en gran medida, a la mayoría de las personas dedicadas a tareas de I+D (OECD, 2012). En cuanto a sus márgenes de independencia institucional, se relacionan habitualmente con la distribución y usos del financiamiento, la selección y promoción del personal docente, de investigación o administrativo, la determinación de sus roles, tareas y salarios, los procesos de incorporación de estudiantes, etc. En cuanto a la interacción con otros espacios de poder, conlleva temas como la neutralidad política, las fórmulas generales para distribuir recursos, el control del gasto ejecutado, los estándares de responsabilidad institucional, la política general de acceso estudiantil, la transferencia de tecnología hacia ciertos sectores, la direccionalidad de las agendas de investigación, etc.

En su clásico trabajo, Varsavsky (1969) reconoció que la *ciencia pura* no existe como tal, sino que asume un carácter políticamente orientado, materializado en la direccionalidad de los recursos y capacidades de investigación. De allí que indica como un ejercicio necesario preguntarse ¿para qué se investiga? y ¿para quién se investiga?, dando cuenta de las nociones de relevancia o pertinencia del desarrollo científico que pongan la ciencia pública permanentemente en debate. Ahora bien, las políticas de ciencia y

tecnología no devienen meramente de decisiones interpuestas *desde arriba hacia abajo*, pues en general, se hallan influidas también por las posiciones que detentan en el esquema de poder otros agentes, sean organizaciones, grupos e individuos (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996).

En la práctica, emerge entonces un *continuum* en el diseño y ejecución de tales políticas científicas donde determinadas decisiones, que son tomadas en la cima de la pirámide, resultan reperfiladas por los agentes de base —quienes cotidianamente desarrollan los procesos investigativos— generando en ocasiones nuevas propuestas y estilos de trabajo. En tal sentido, “el relativo alcance de una política de ciencia y tecnología deviene siempre de un complejo entramado de relaciones sociales y de legitimación teórica, en el cual confluyen factores intra e interestatales e intereses nacionales e internacionales” (Aristimuño y Aguiar, 2015, p. 43).

Respecto a ello, cabe destacar precisamente, que uno de los fenómenos que más ha permeado los procesos de autonomización de la investigación en universidades y organismos científicos de las llamadas comunidades periféricas, ha sido la mercantilización de la ciencia y la educación superior, cuya producción de conocimientos e innovaciones se han visto frecuentemente subestimadas a nivel global. De acuerdo con Beigel (2013), ello ha reforzado la estructura de poder y el lugar central otorgado por el denominado *Sistema Académico Mundial* [SAM] a los *centros de excelencia* de los países considerados más desarrollados. En gran medida, esta situación de acentuada desigualdad, deviene de la ponderación y universalización de ciertos *indicadores internacionales* tales como los rankings universitarios, bases bibliométricas o patentométricas (construidos con una lógica *top down*) que habitualmente son esgrimidos como herramientas predilectas (objetivas y confiables) para *certificar* la calidad de los conocimientos producidos y circulantes en todo el mundo.

Se instituyó así, la imagen de una ciencia considerada *mainstream* o *de corriente principal* legitimada / promovida por aquellos indicadores internacionales y otra rotulada como *marginal* o *periférica*, esgrimida las más de las veces como una categoría residual receptiva de todo lo que estaba fuera de aquellas bases de datos. Uno de los corolarios de estos procesos, fue la ampliación de los márgenes de la “ciencia privatizada” (Rikap y Naidorf, 2020) entendida como aquella que por medio de copiar agendas y prioridades exógenas al

contexto de creación del conocimiento y a las necesidades sociales (independientemente de que sus resultados fuesen públicos), terminó por beneficiar la acumulación de ganancias privadas.

No obstante, la investigación desarrollada en las comunidades periféricas no se halla unilateralmente subordinada a las agendas científicas de los países centrales. Discutiendo la idea de una mera dependencia académica, Beigel, Gallardo, y Bekerman (2018) han señalado que la periferia no está representada por disciplinas homogéneas y no hay un formato unívoco de imposición de estándares científicos y académicos devenidos de los campos *mainstream*. En contraste, el fenómeno de la dependencia académica en la periferia se ha desarrollado por vías más complejas y estas comunidades no son meras consumidoras de conocimientos importados, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales como veremos a lo largo de este trabajo.

De hecho, la periferialidad científica viene atravesando en las últimas décadas un proceso sostenido de diversificación, apoyándose cada vez más en sus propias capacidades locales. En Latinoamérica, por ejemplo, los campos académicos evidencian una configuración heterogénea, pudiendo reconocerse diversas modalidades y escenarios de producción y circulación de saberes: hay académicos bien integrados a los estilos *mainstream*, otros insertos en circuitos regionales alternativos (dinamizando instancias científico-tecnológicas colaborativas en el eje Sur-Sur) y algunos más, que persisten vinculados a agendas endógenas de investigación.

Lo antedicho conduce a preguntarnos por la construcción de la ciencia pública, particularmente en un país como Argentina devenido en un campo científico-universitario dinámico, de carácter acentuadamente público y con una fuerte tradición de autonomía científica, pero inserto en las redes de jerarquización delineadas por el SAM y con diversas heterogeneidades intranacionales en sus procesos de producción, circulación y validación de conocimientos.

La autonomía del campo científico-universitario en nuestro país reviste cierta singularidad. Si bien es uno más entre los campos de la producción cultural, fue adquiriendo especificidad a medida que se consolidaron las redes académicas y de investigación científica mediante la creación de nuevas universidades, institutos, agencias gubernamentales de ciencia y tecnología, entre otros organismos.

Respecto a ello, Myers (1992) reconoce diferentes etapas de institucionalización de la investigación en el país, delimitadas en mayor o menor medida por los contrapesos de los sectores gubernamentales y sociales-empresariales: a) inicialmente se desarrolló en instituciones que no eran específicamente destinadas a la investigación (hasta 1910 / 1920); b) luego de la reforma de 1918 se ancló en las universidades públicas (hasta 1955 / 1958) y; c) finalmente cristalizó en un Complejo Científico Tecnológico Nacional sistematizado a través de políticas concretas esgrimidas por el Estado, donde las universidades ya no contaban con su patrimonio exclusivo, promoviéndose cada vez más por agencias científicas específicas sostenidas gubernamentalmente.

Pero, aunque todo el campo reconoce y responde a criterios de autonomía y libertad académica, en tanto principios estructurales devenidos de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, su devenir evidencia una historia de relaciones y tensiones con los poderes externos, especialmente durante los gobiernos cívico-militares. La última dictadura cívico-militar (1976-1983), constituye un interregno a destacar porque se produjo un reordenamiento sistemático de los recursos destinados a la investigación científica cristalizado en una transferencia presupuestaria desde las universidades nacionales hacia el CONICET (Bekerman, 2016), como complemento de las prácticas clandestinas de desaparición, torturas y muerte que alcanzaron a gran parte de la comunidad académica.

A partir de 1983, con la recuperación democrática, se intentó revertir esta tendencia y las universidades fueron retomando su rol en la investigación. Se trató de vincular al CONICET con las universidades y a la actividad investigativa en general con el sector productivo, creando para ello el Área de Transferencia de Tecnología en 1984 (Albornoz y Gordon, 2011). Sin embargo, hacia 1990 el aparato gubernamental actuó en detrimento de la tradicional autonomía tanto del CONICET como de las universidades, a partir de instaurar una especie de *Estado Evaluador* que implicó mayor regulación de estas instituciones vía financiamiento y evaluación, creando diferentes organismos amortiguadores del control del Estado, entre ellas la Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria [CONEAU] y la Secretaría de Políticas Universitarias [SPU], desde donde se desplegó el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores [PROINCE] como paso crucial hacia una

mayor regulación y orientación de las actividades docentes y de investigación en las Universidades (Prado, 2021 y Rovelli, 2015).

En cuanto a las últimas décadas, el campo científico-universitario argentino experimentó un relevante y heterogéneo desarrollo siendo las universidades nacionales y el CONICET los ámbitos esenciales en la producción de conocimientos científicos. Varios autores (Unzué y Rovelli 2017a; Cebrelli y Arancibia 2017; Beigel, Gallardo y Bekerman, 2018; Oregioni y Sarthou, 2013) han examinado la reciente dinámica expansiva del campo signada por un considerable aumento presupuestario cristalizado en la apertura de nuevas instituciones, recomposición salarial de docentes y administrativos, fortalecimiento del sistema de becas científicas y carreras de posgrado y la triplicación del número de investigadores/as *full time*, entre otros. Gran trascendencia tuvo la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva [MinCyT] y su separación respecto del Ministerio de Educación en 2007. Estos y otros procesos, devenidos con fuerza entre 2003-2015, restituyeron al país su antiguo rol como *centro periférico*, consolidando su matriz universitaria y científica pública. No obstante, durante esta etapa se profundizaron una serie de asimetrías institucionales y desigualdades geográficas al interior del campo:

Se profundizó la polarización entre los científicos integrados a los estilos de producción dominantes en el sistema académico mundial y los que tienen una agenda más endógena. Aunque conviven tendencias autónomas y heterónomas tanto en el espacio internacionalizado como en el espacio más orientado a lo local. (Beigel, 2017, p. 828)

La distinción analítica propuesta por la autora de dos perfiles contrapuestos de académicos en relación con sus estrategias de consagración desde la periferia nacional, algunos con una fuerte apuesta en el circuito *mainstream* (esencialmente en torno al sistema de publicaciones) y otros partícipes más bien de una agenda local, endogámica y resistente a ciertas reglas de la mundialización de la ciencia, invita a reflexionar los claroscuros entre uno y otro extremo. Podría pensarse, por ejemplo, que gran parte de las/los investigadores que construyen sus carreras en el CONICET se encuentran altamente internacionalizados, mientras que la mayoría de las y los docentes-

investigadores universitarios despliegan un *habitus* más local y gozan de reconocimiento institucional.

Sin embargo, no se trata de espacios compartimentados sino articulados. Por ambas instituciones, transitan docentes, investigadores/as, becarios/as y técnicos que son permanentemente evaluados en su productividad y labores. De hecho, varios conicetistas participan de la vida universitaria en diversos niveles, sea mediante un cargo docente simple o dirigiendo institutos de investigación o carreras de posgrado. En este sentido, la internacionalización de la carrera científica en Argentina es fruto de la combinación de un *habitus* internacional y ciertos saberes y habilidades compatibles con un capital institucional estimulado nacionalmente.

En un trabajo reciente, Beigel y Bekerman (2019) han señalado que los márgenes de reconocimiento en el mundo científico argentino constituyen un proceso complejo en el que coexisten diversas culturas evaluativas: el CONICET ha crecido geométricamente en todo el país, con lo cual su cultura evaluativa relativamente internacionalizada aparece (en mayor o menor medida) en todo el campo, aunque los perfiles de académicos/as más internacionalizados se concentran en las universidades más prestigiosas (emplazadas en la zona metropolitana del país) mientras los más *localistas* se concentran en las universidades del interior.

En suma, el campo científico-universitario argentino se ha ido configurado históricamente como un espacio acentuadamente público, pero fuertemente heterogéneo. La heterogeneidad es, precisamente, uno de los determinantes claves para comprender y caracterizar los distintos circuitos de producción y circulación del conocimiento científico que funcionan en el país y sus vinculaciones con el SAM. Se trata de un fenómeno persistente que ha tendido a acentuarse en años recientes.

Configuración heterogénea de los proyectos de I+D en las universidades argentinas

Como vimos, diversos estudios vienen analizando el devenir de la investigación científica en el país, cristalizada fundamentalmente en las dos instituciones principales que sostienen esta actividad: el CONICET y las universidades públicas. En efecto, según el último informe sectorial de resultados del “Relevamiento anual a entidades que realizan actividades científicas y tecnológicas” desplegado por

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT, 2020), del total de \$ 99 664 millones invertidos en la materia, el 61,4 % fueron ejecutados por organismos públicos, donde destacan principalmente el CONICET y las universidades de gestión estatal. Dichas instituciones concentran, además, la mayoría de los recursos humanos dedicados a estas actividades: del total de 120 586 personas, incluyendo investigadores/as, becarios/as, personal técnico y de apoyo, el 63 % (76 571 personas) provienen de Universidades Nacionales y el 15 % (17 625 personas) de organismos públicos de ciencia, correspondiendo fundamentalmente al CONICET.

En este marco, las universidades constituyen claramente uno de los “locus de producción de conocimiento por excelencia” en el país (Senejko y Versino, 2019, p. 77), de allí que desarrollen diversas propuestas endógenas para orientar la investigación cristalizadas las más de las veces, en la acreditación y financiamiento de diversos proyectos científico-tecnológicos que redundan en procesos de transformación social. La investigación constituye una de las funciones misionales de las universidades y, habitualmente, se plantea en y desde una articulación con las funciones de docencia y extensión, complementando los niveles de formación en grado y posgrado y contribuyendo a incentivar nuevas vocaciones científicas y cualificar el desarrollo profesional en general. En este marco, los proyectos de investigación pueden ser entendidos como una serie de actividades sistemáticas desarrolladas por grupos de investigadores/as, docentes-investigadores/as becarios/as y personal técnico, vinculadas a la construcción / producción, circulación / difusión y aplicación de conocimientos en las diversas áreas de la ciencia y la tecnología (RICYT, 2017). Según un estudio reciente presentado por Martín Unzué y Laura Rovelli:

de un total de 53 universidades nacionales, el 60 % (32 instituciones) contaban con subsidios para la promoción de la investigación con fondos propios, mientras que dentro de ese grupo casi el 60 % (19 casas de estudio) fijaron algún tipo de área de conocimiento o temática prioritaria/estratégica para financiar proyectos y/o becas de investigación. (Unzué y Rovelli, 2017b, p. 21)

En efecto, a nivel del conglomerado universitario público de Argentina la mayoría de las instituciones universitarias comparten el interés por promover instrumentos propios para orientar la investigación científica. No obstante, además de estas iniciativas institucionales endógenas, coexisten diversas apuestas desarrolladas desde el mismo sistema universitario nacional, entre los que se destacan los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica [PICT] que constituyen el principal instrumento de financiamiento a nivel nacional y son promovidos por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica [FONCYT] dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica [ANPCYT], así como los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados [PICO] promovidos desde el Consejo Interuniversitario Nacional [CIN], los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social [PDTs] también impulsados por el MINCYT así como los propios Proyectos de Investigación Plurianuales [PIP] del CONICET, entre otras varias convocatorias.

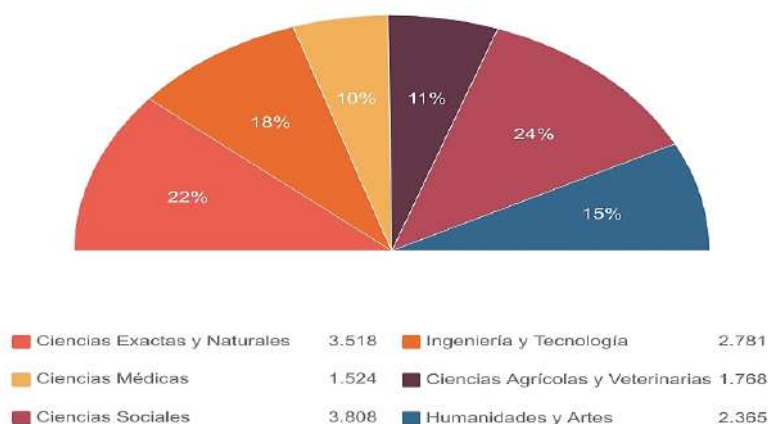
La literatura especializada disponible coincide en constatar el impacto positivo de estos proyectos de investigación universitarios a escala nacional, en materia de su impacto al desarrollo científico y social y la producción de conocimientos. Si consideramos los datos más recientes aportados por el mencionado informe del MINCYT (2020) puede apreciarse que las universidades públicas contaron con una inversión de \$ 22 264 millones en 2019 destinados para la ejecución de un total de 15 764 proyectos de I+D, distribuidos de la siguiente forma según tipos de actividad: 5 730 proyectos para investigación básica, 8 994 para investigación aplicada y 1 040 para desarrollo experimental.

Ahora bien, si focalizamos en la distribución de recursos entre provincias, áreas de conocimiento e instituciones, se ponen de manifiesto los rasgos asimétricos que guarda la estructura histórica-institucional del sistema universitario argentino. Respecto a la inversión en I+D por regiones, el precitado informe del MINCYT (2019) muestra que más de la mitad del total invertido en la materia para dichas instituciones (\$ 10 419 millones de pesos corrientes) al año 2019 se concentra en universidades situadas en las regiones metropolitana y bonaerense del país: 31 % en la Provincia de Buenos Aires y 28 % en la Ciudad de Buenos Aires, seguido y muy de lejos por las provincias de Córdoba (9 %) y Santa Fe (8 %), mientras que

el resto de las provincias cuentan con menos del 4 % de los recursos destinados al sector universitario para I+D.

Ahora bien, a los fines de este trabajo interesa reparar en la distribución de dichos proyectos según áreas de conocimiento:

Gráfico 1. Proyectos de I+D en Universidades Nacionales argentinas, según grandes áreas de conocimiento. Año 2019, en valores absolutos y relativos



Fuente: elaboración propia, en base a datos del MINCyT (2019).

La segmentación por áreas de conocimiento en el campo científico-universitario nacional no es un fenómeno nuevo, Beigel, Gallardo y Bekerman (2018) han señalado que mientras el CONICET absorbe el grueso de investigadores/as e institutos pertenecientes principalmente a las llamadas *ciencias duras*, las universidades concentran capacidades y recursos provenientes esencialmente de las ciencias sociales y humanidades. En línea con ello, el gráfico antepuesto muestra que la reciente inversión del Estado argentino en materia de I+D para financiar proyectos científico-tecnológicos en las universidades públicas asume una distribución diferencial según áreas de conocimiento, alcanzando un rango de inversión del 39 % del total en las áreas de ciencias sociales y humanidades, destacándose los niveles más bajos para los casos de las ciencias agrícolas y para las ciencias médicas respectivamente.

En sintonía, otros autores han advertido que el desarrollo de la producción científica vía proyectos de investigación ha conllevado un alcance acentuadamente diferencial si se introducen ciertos controles: por disciplinas y a nivel de provincias e instituciones.

Los impactos suelen ser mayores, en cuanto a área disciplinar, en las ciencias biomédicas; en cuanto a localización geográfica en las regiones Centro y Patagonia; y en cuanto a instituciones, en la Universidad de Buenos Aires [UBA] y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET] (Suarez y Fiorentín, 2018, p. 13)

Ahora bien, además de estas asimetrías, se observan también estructuras institucionales profundamente heterogéneas entre las universidades: existen, por ejemplo, importantes diferencias no solo en cuanto a las partidas presupuestarias asignadas y recursos propios que detentan, sino también en relación con la cantidad y tipos de carreras que conforman su oferta académica (y, específicamente, la inclusión o no de posgrados), las características socio-demográficas del cuerpo estudiantil, el nivel de formación alcanzado por sus docentes e investigadores/as, la cantidad y tipos de cargos disponibles, las categorías de investigación que detentan tanto en CONICET como en el Programa de Incentivos, así como el número de centros, laboratorios e institutos de investigación con que cuentan y sus áreas disciplinares y líneas de investigación respectivas.

Aspectos metodológicos

Criterios de diversidad institucional para la selección de casos de estudio

A los fines de este trabajo se estima valioso distanciarse relativamente de la mirada macro-institucional muy extendida en los estudios sobre el sistema científico-tecnológico nacional y acentuar el lente analítico en las estructuras e interacciones de las instituciones y grupos de investigadores/as específicos que las conforman y confieren su especificidad. De hecho, varios autores (entre los que se destacan Emirbayer y Johnson, 2008 o Bianco y Sutz, 2005), han reconocido que, si bien cada organismo científico o institución universitaria se halla situado dentro de los límites de un campo

académico nacional determinado, heredando sus pautas generales de juego y siendo permeado por sus respectivas políticas públicas, revisten determinadas particularidades y dinámicas histórico-sociales propias.

Por otro lado, dada la acentuada heterogeneidad regional-disciplinar-institucional del campo científico-universitario argentino, los trabajos disponibles no alcanzan a explicar las particulares dinámicas de producción / circulación de conocimientos. De allí que este trabajo pretenda examinar los márgenes de producción del conocimiento en torno a una serie de universidades nacionales del país, seleccionadas de forma *ad hoc*, focalizando específicamente en la configuración de sus proyectos y agendas de investigación dentro del área de las ciencias sociales. En este sentido, privilegiamos un tipo de “indagación empírica situada” (Knorr Cetina y Cicourel, 1981) que permita desplegar una mayor profundidad analítica a partir de seleccionar ciertas propiedades de análisis en los casos bajo estudio.

Del total de 57 universidades de gestión estatal nacional informadas por la SPU (2021), se han seleccionado como casos analíticos las Universidades Nacionales de Tucumán [UNT], San Juan [UNSJ], Río Cuarto [UNC], Patagonia Austral [UNPA], La Plata [UNLP], General San Martín [UNSAM], Moreno [UNM], del Sur [UNS], Patagonia San Juan Bosco [UNPSJ] y Nordeste [UNNE]. Este conjunto de universidades, revisten un doble interés de abordaje: por un lado, porque sus características institucionales permiten poner de relieve el carácter heterogéneo del desarrollo de I+D en el campo científico-universitario nacional, habilitando un marco de observación —desde un nivel institucional— de algunos rasgos del país como centro académico periférico en el escenario mundial y; por otro lado, porque presentan ciertos mecanismos institucionales / disciplinares que regulan de modo particular el desarrollo de la investigación, sus proyectos y agendas respecto a otras instituciones.

Interesa destacar que, entre los criterios de selección de dichas instituciones universitarias, además del desarrollo de capacidades de investigación específicas en el área de ciencias sociales, se tomaron en cuenta ciertos criterios de diversidad histórico-estructurales como su ubicación geográfica, antigüedad y el tamaño institucional en relación al presupuesto y cantidad de estudiantes y egresados/as.

A continuación, se presenta una tabla que sintetiza estos factores institucionales diferenciales que refuerzan su selección como casos de análisis.

Tabla 1. Universidades Nacionales argentinas seleccionadas para el estudio, según criterios de diversidad institucional

Universidades seleccionadas	Localización según CPRES	Año de creación	Presupuesto 2019 (en millones de pesos)	Cantidad de estudiantes 2019	Cantidad de egresados/as 2019	Relaciones estudiantes / docentes 2019
UNLP	Bonaerense	1905	\$ 8 414,8	108 047	6 546	9,1
UNT	Noroeste	1914	\$ 5 684,7	66 246	2 255	14,6
UNS	Bonaerense	1956	\$ 2 350,7	20 122	975	7,3
UNNE	Noreste	1956	\$ 3 406,6	51 685	3 144	14,5
UNRC	Centro	1971	\$ 1 832,9	16 355	683	9,3
UNSJ	Cuyo	1973	\$ 3 390,8	21 524	744	8,2
UNPSJB	Sur	1980	\$ 2 069,2	15 683	564	7,5
UNSAM	Metropolitana	1992	\$ 1 519,5	15 908	1 139	7,9
UNPA	Sur	1994	\$ 1 182,7	8 555	139	8,0
UNM	Metropolitana	2009	\$ 431,2	8 068	159	12,1

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la SPU (2019), CISE (2019) e INDEC (2021).

Algunos datos relevantes a destacar de la tabla anterior relativos a la diversidad de casos institucionales seleccionados, lo constituyen por ejemplo el presupuesto 2019 asignado para las cincuenta y siete universidades nacionales que según el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas [CISE] ascendió a \$ 121 952 millones. Si atendemos a su distribución por universidad, destaca la UN La Plata (con \$ 8 414,8 millones) que, junto a la UBA y la Universidad de Córdoba, son las instituciones que han requerido mayor presupuesto, absorbiendo más del 30 % del total previsto para el conglomerado de universidades públicas del país. En el otro extremo de las instituciones

abordadas, se halla la Universidad de Moreno con un presupuesto de \$ 431,2 millones, constituyendo una de las instituciones de creación más reciente en el ámbito nacional.

Sobre la cantidad de estudiantes y egresados, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2021) destacan las instituciones más antiguas del país como la UN La Plata que nucleó al 2019 un total 108 047 estudiantes y contabilizó 6 546 egresados/as y también la UN de Tucumán con 66 246 estudiantes y 2 255 profesionales graduados/as. En contraste, la institución con menos cantidad de estudiantes matriculados y recién graduados es la UN de Moreno (con 8 068 estudiantes y solo ciento cincuenta y nueve egresados/as) lo que podría deberse a su reciente institucionalización. Una situación similar presenta la UN de la Patagonia Austral que, dada su localización geográfica y características demográficas del sector estudiantil en edad universitaria, presenta también una reducida matrícula estudiantil (8 555 alumnos/as), siendo además la universidad con menor cantidad de graduados (ciento treinta y nueve).

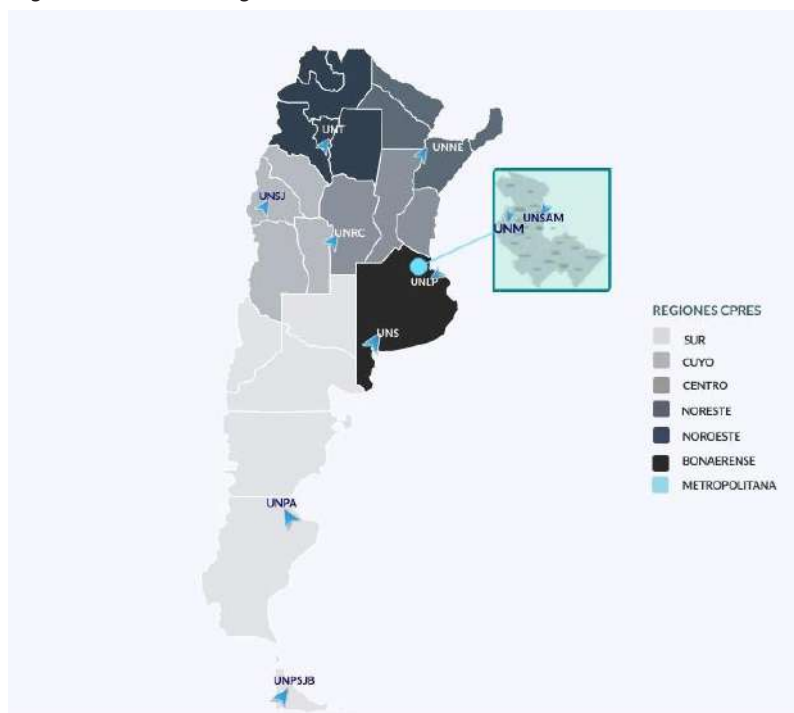
En este marco, resulta de interés indagar la cantidad de estudiantes por docente según universidad. Las instituciones que poseen el ratio más elevado son las UN de Tucumán y del Nordeste, ambas emplazadas en la región norte del país, con catorce estudiantes por docente. En el polo opuesto, se encuentran las UN del Sur y de la Patagonia San Juan Bosco con tan solo cinco estudiantes por cada docente. Ambos extremos se encuentran distanciados del promedio nacional (11,4), destacándose solo la UN Moreno cerca de la media con doce estudiantes por docente.

Como puede apreciarse, los datos relativos a presupuestos, cantidad de estudiantes y egresados y su relación respecto al plantel docente, están atravesados por dos variables de gran peso: el emplazamiento geográfico y la antigüedad de la institución. De allí que en lo que sigue, focalicemos en ambas variables que se constituyeron aquí en parámetros relevantes para la selección de casos.

Respecto a su ubicación geográfica, se sabe que el sistema universitario argentino está organizado regionalmente a los fines de dinamizar su gestión, coordinación y articulación interinstitucional. Conforme a la Resolución 280/2016 del Ministerio de Educación de la Nación, las siete regiones académicas del país son coordinadas por Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior

[CPRES], integrados por los ministros de educación de las provincias correspondientes a cada región y los respectivos rectores de las universidades allí localizadas. Las universidades seleccionadas para este estudio se distribuyen en las diferentes regiones de los CPRES, de la siguiente manera:

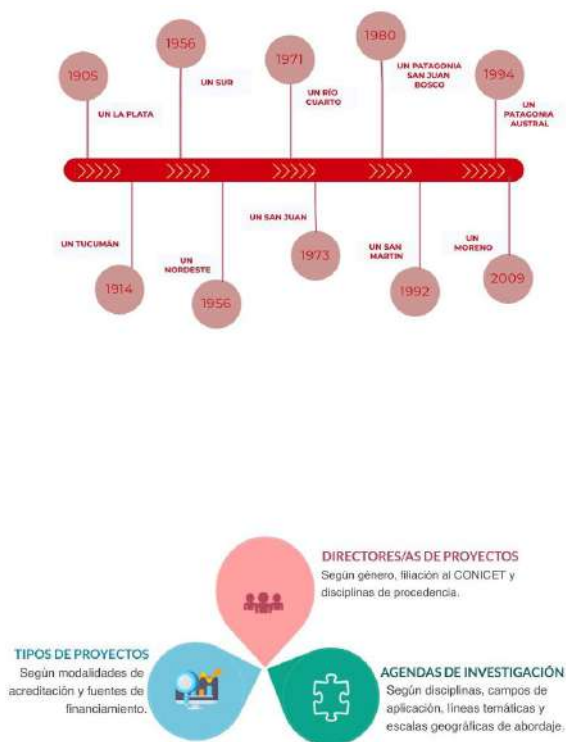
Gráfico 2. Universidades nacionales argentinas seleccionadas para el estudio, según localización en regiones de los CPRES. Año 2021



Fuente: elaboración propia, sobre la base de datos del CPRES (2021).

Articulando la literatura especializada disponible (Rovelli, 2015 y Buchbinder, 2010) y el material histórico-institucional obtenido en nuestro relevamiento, hemos establecido también una periodización del devenir de las universidades bajo estudio, evidenciando que la fecha de creación funcionó también como un criterio de diversidad institucional.

Gráfico 3. Universidades nacionales argentinas seleccionadas para el estudio, según años de creación. Año 2021



Fuente: elaboración propia.

En el esquema antepuesto, puede identificarse el momento de creación de cada una de las universidades bajo estudio que, como veremos, responden a diversos modelos institucionales relativos a diferentes etapas históricas.

El modelo universitario profesionalista, que se afianzó en las instituciones argentinas desde fines de siglo XIX, fue estimulando firmemente carreras de corte liberales que nutrieron en gran medida a las universidades más grandes y antiguas del país y el continente como las de Córdoba y Buenos Aires, constituidas entonces en espacios profundamente elitistas. Dado este perfil, como ya indicamos anteriormente, la investigación se desarrollaba fuera de las universidades y a lo sumo en algunos centros aislados. No obstante, el pasaje al siglo XX estuvo signado por voces cada vez más críticas

que, entre otras cosas, pusieron en cuestión la falta de autonomía institucional y de estímulo a las vocaciones científicas.

En este marco se destaca el devenir de dos de nuestras instituciones bajo estudio: la UN de La Plata fundada en 1905 (CONEAU, 2010) y la UN de Tucumán creada en 1914 (CONEAU, 1998). Inspiradas en el modelo humboltiano, de universidad alemana, se enmarcaron entre las primeras experiencias universitarias del país con una fuerte base científica, sostenidas en los principios de autonomía académica y articulación entre las funciones de investigación y docencia. Con el transcurso del tiempo, estas tendencias se fueron afianzando en el conjunto de la comunidad universitaria y sentaron las bases para el surgimiento del movimiento de la Reforma Universitaria de 1918.

Posteriormente, tras el devenir del gobierno peronista y en línea con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que entonces estimulaba, el sistema educativo en general fue reorientado hacia una vertiente técnica-industrial. En efecto, el crecimiento sostenido de la producción industrial en el país conllevó una creciente demanda de mano de obra calificada, especialmente en las áreas de ingenierías y enseñanza regionalizada. En este marco, se creó la Universidad Obrera Nacional concebida como “una instancia para favorecer la movilidad social de la clase trabajadora” (Buchbinder, 2010, p. 158). Pero tras el derrocamiento del peronismo, la institución fue intervenida y en 1959 pasó a denominarse Universidad Tecnológica Nacional. En este contexto, comenzó a extenderse en el país y la región el modelo norteamericano de *research universities*, que promovió la creación de departamentos e institutos que articulando disciplinas afines funcionaran como bisagras integrales de construcción de conocimientos.

Fue entonces cuando el sistema universitario experimentó un fuerte proceso de modernización, cuyo epicentro fue la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. En este marco, se crearon hacia 1956 tanto la UN Sur (CONEAU, 2013) —que organizó su estructura académica por Departamentos en lugar de las tradicionales Facultades, permitiendo mayor flexibilidad y transversalidad de conocimiento— y la UN del Nordeste (CONEAU, 2011) que nació también con una fuerte impronta hacia la investigación científica estableciendo una estructura por Departamentos Básicos (Culturales o Científicos) y Profesionales, a partir de capitalizar y dinamizar institutos y

capacidades de investigación preexistentes en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Otro interregno relevante a destacar, es la etapa de descentralización / despolitización por la que atravesó el sistema universitario nacional a comienzos de los años setenta. En este marco se implementó el denominado Plan Taquini que estimuló la creación y nacionalización de universidades en distintas provincias, con la finalidad de descomprimir la matrícula de las grandes universidades. Si bien, inicialmente, se preveía la creación solo de cuatro o cinco nuevas instituciones, numerosas iniciativas de distintos colectivos sociales en varias provincias buscaban consolidar el desarrollo científico y profesional local, presionando al gobierno de turno para evitar que sus estudiantes (futuros profesionales) debieran desplazarse a otros lugares. En definitiva, emergieron más de una decena de nuevas instituciones en este contexto, y entre ellas destacan la UN de Río Cuarto (UNRC, 2019) creada en 1971 y la de UN San Juan (UNSJ, 2011) fundada en 1973.

Tras el advenimiento de la última dictadura militar devino una nueva y compleja etapa para el campo científico-universitario argentino. Como ya hemos adelantado, tanto el CONICET como las universidades nacionales fueron depurados inicialmente, pero mientras el Consejo experimentó, luego una profunda reorganización institucional, procesos de descentralización y creación de institutos de investigación regionalizados (Algañaraz y Bekerman, 2014), las universidades públicas atravesaron por una interminable etapa de persecución, represión y hasta clausura como en el caso de la Universidad Nacional de Luján.

En este marco, el gobierno militar estimuló también procesos de reducción del sistema de educación superior vía estrategias de unificación de instituciones universitarias. Este fue el caso de la UN de la Patagonia San Juan Bosco creada mediante la Ley 22 173 en 1980, mediante un proceso de unificación de una institución universitaria estatal (la Universidad Nacional de la Patagonia, creada en 1974 durante el tercer gobierno peronista) con la Universidad Católica de la Patagonia San Juan Bosco (Algañaraz, 2016), bajo la justificación de evitar la duplicación de carreras en una misma región.

Luego, tras el retorno a la democracia devino un proceso de recuperación de la autonomía universitaria, refuncionalización de las funciones misionales de las instituciones y fuerte expansión de

la matrícula. Durante el contexto de los complejos años noventa, bajo el paraguas de las reformas neoliberales de corte neoliberal se impulsó una profunda reforma universitaria, procurando adaptar las instituciones universitarias y organismos científicos a las orientaciones establecidas por el mercado. En este marco, se crearon más de una veintena de universidades privadas y 10 de gestión estatal, destacándose entre ellas la UN de San Martín en 1992 (CONEAU, 2014) y la UN de la Patagonia Austral (CONEAU, 2003) en 1994, como resultado de esfuerzos sociales e iniciativas políticas de la zona en que están emplazadas.

Un rasgo común de este grupo de universidades es tomar como nombre la ciudad o partido en el que se asientan, diferenciándose de las creadas en años anteriores que tomaban para su denominación el nombre de la región geográfica o provincias, en lo que podría considerarse una prevalencia del valor de lo local por sobre lo provincial o regional. (Acinelli y Macri, 2015, p. 98)

Ahora bien, como ya señalamos, luego de la crisis estructural de 2001-2002 inicia una etapa de recuperación de las variables de inversión en I+D en el país y de recomposición de las relaciones entre gobierno y universidad. En este contexto, se implementa el Programa de Diagnóstico y Evaluación de la Expansión de la Educación Superior y a partir de 2009 se crearon en el Conurbano varias nuevas Universidades Nacionales, entre ellas precisamente la UN de Moreno (CONEAU, 2020), que constituye la institución de creación más reciente entre las universidades aquí abordadas.

Indicadores institucionales de circulación de la investigación en ciencias sociales

Tal como mencionamos, este trabajo se enmarca en el CECIC-UNCuyo desde donde venimos desplegando un pasaje técnico y conceptual desde el paradigma de la internacionalización hacia el de la circulación de conocimientos, incorporando como dimensión de análisis no solo al circuito *mainstream* sino todas sus escalas de interacciones (local, nacional, regional e internacional) y las diferentes instancias y ámbitos de circulación / legitimación, en

pos de trascender la sola consideración y sobreestimación de las publicaciones científicas.

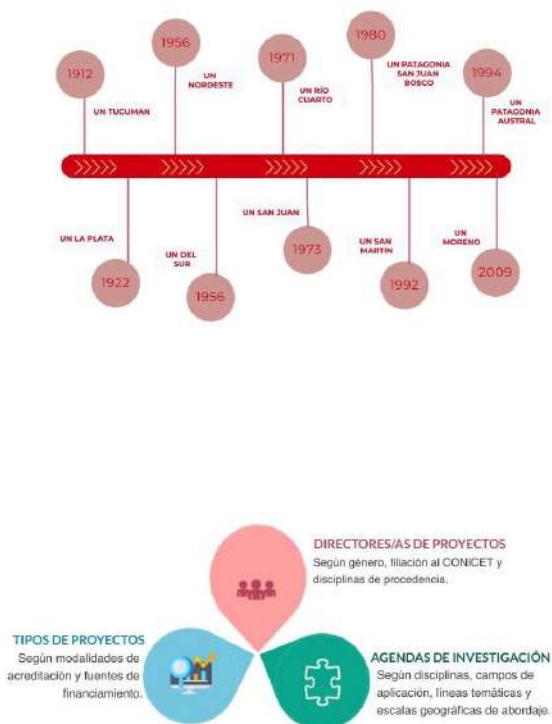
Las intervenciones impulsadas por la globalización académica no son procesadas por cada institución independientemente, o por los individuos sin mediaciones, sino que están conectadas con las políticas nacionales que operan reforzando tendencias. En algunos países latinoamericanos, la autonomía universitaria sigue siendo una tradición fuerte. En otros, se han concentrado en insertar a su comunidad académica en el circuito mainstream para mejorar la performance de sus universidades en los rankings y aumentar así la cantidad de matrícula / “clientes”. Pero, aún en esos contextos, se puede observar la resistencia de una agenda local conducida por investigadores preocupados por vincular el conocimiento con las necesidades sociales y productivas. Buena parte de esta producción se encuentra en la extensión universitaria que es una función presente en universidades de todo el continente. Es hora de revalorizar esos conocimientos y el diálogo de saberes que suponen (Beigel, 2019, p. 8).

De allí que, en la búsqueda por analizar los *estilos institucionales* de producción y circulación del conocimiento de las instituciones universitarias, desde el CECIC diseñamos un modelo relacional de indicadores de circulación de corte meso, institucional, que distanciándose de toda pretensión de clasificación jerárquica procure más bien (re)conocer las diferentes dimensiones y escalas múltiples de circulación del conocimiento. Este modelo de indicadores ha cristalizado en el denominado Manual de Cuyo y consiste en el relevamiento primario, observación y análisis de 4 grandes dimensiones: espacialidad académica, vinculación universidad-sociedad, producciones científicas publicadas y capacidades e interacciones de investigación. Estos indicadores procuran reconocer las conexiones locales que dinamizan el impacto social del conocimiento científico y poner en valor las interacciones regionales.

A los fines de este trabajo, nos concentraremos en la dimensión analítica referida a las capacidades e interacciones de investigación, que estimamos permitirá contemplar la diversidad de agendas científicas

y la multi-escalaridad de las interacciones de las universidades en materia de I+D.

Gráfico 4. Esquema-resumen de bloques de indicadores analíticos, dimensión capacidades e interacciones en investigación del Manual de Cuyo



Fuente: elaboración propia, sobre la base de datos del Manual de Cuyo (CECIC, 2021).

Entonces, sobre la base del Manual de Cuyo, el presente trabajo avanza examinando la configuración de los diferentes tipos de proyectos de investigación ejecutados en las universidades bajo estudio en el ámbito de las ciencias sociales, focalizando especialmente en la construcción de sus respectivas agendas de investigación.

Ahora bien, la definición de la agenda de un proyecto de investigación en las universidades es un proceso particularmente complejo. Su conformación excede las meras fronteras del laboratorio, centro o instituto donde se desarrolla, debiendo las y los científicos relacionarse con otros académicos/as de su propio campo u otros campos vecinos (sea para ejecutar, divulgar y/o validar los conocimientos), al tiempo que interactuar necesariamente con otros actores académicos y no académicos que intervienen decididamente en su diseño, ejecución y alcance, tales como funcionarios de la propia institución y/o de otros organismos que acreditan y financian la investigación.

Lo primero que tiene que hacer un investigador al definir una línea de investigación es buscar una fuente de financiamiento que le permita comprar equipamientos, reactivos, pagar becarios, técnicos, etc. Normalmente, las agencias de financiamiento no financian cualquier tipo de investigación, sino que tiene prioridades, metodologías, orientaciones privilegiadas, etc. Por ello los investigadores deben negociar con la agencia la obtención de los recursos que necesitan para sus proyectos. No hay ninguna razón para suponer, pues, que la naturaleza de estas relaciones, claramente “extra laboratorio” y, aun, “extra científicas” es algo que esté “afuera” de los procesos de fabricación de los conocimientos, sino que, por el contrario, lo determinan fuertemente. (Kreimer, 2004, p. 213)

Para comprender en qué consiste un proyecto de investigación que esté acreditado oficialmente, adoptamos la definición esgrimida en el Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de las Universidades Nacionales (Res. N.º 1543/14 del Ministerio de Educación). Acreditados son, en efecto, aquellos programas o proyectos que han sido evaluados y aprobados por una entidad habilitada que, además, puede financiar total o parcialmente su ejecución; tales como el CONICET, la ANPCyT, las propias Universidades Nacionales y ciertos Consejos de Investigación de algunas provincias como Buenos Aires o Córdoba. Los proyectos que no reciban financiamiento específico deberán ser avalados por resolución de la Universidad respectiva que garantice su viabilidad.

De igual modo, los proyectos desarrollados en una unidad de investigación sin dependencia directa de la Universidad en la que el investigador/a tiene su cargo docente, deberán ser reconocidos por dicha institución vía convenio con la entidad en la que se desenvuelve el proyecto. Como veremos en las páginas siguientes, las universidades argentinas presentan ambos tipos de situaciones en relación con sus proyectos de investigación.

Ahora bien, para ser acreditados como tales los proyectos deben cumplimentar con el sistema de evaluación establecido por la SPU, basado en el juicio de pares disciplinarios externos y desdoblado en dos etapas. La primera, de tipo *ex ante* que permitirá acreditarlos, donde se evalúa la calidad y pertinencia del plan de investigación propuesto, así como los méritos del director/a (quién, entre otros requisitos, deberá contar con categoría I, II o III del PROINCE o méritos equivalentes en el CONICET u otros organismos científicos) y también los antecedentes del equipo de investigación. La segunda instancia es de tipo *ex post* y en ella se valoran las actividades desarrolladas en el marco de los programas o proyectos, según el detalle de lo declarado en los informes parciales y finales.

Respecto al universo de proyectos de ciencias sociales en las universidades que fueron examinadas, cabe destacar que, en la búsqueda por construir una base de datos consolidada e integrada, se seleccionaron y procesaron diferentes fuentes de información:

1º. Se accedió a las páginas web de las diez universidades estudiadas y descargaron los listados completos de proyectos aprobados, financiados y ejecutados al 2021, constituido en el año T (periodo sincrónico de estudio).

2º. Adicionalmente, se ingresó a diferentes sitios oficiales de organismos científicos nacionales que dichas instituciones declaraban como otros entes acreditantes de sus proyectos. En este sentido, se exploraron las bases de proyectos de la ANPCyT y CONICET, donde se descargaron los listados correspondientes y aplicaron filtros para delimitar los casos de cada universidad en estudio y su anclaje en el ámbito de las ciencias sociales.

A partir de estas búsquedas, se desplegó un tratamiento primario y artesanal de la información para consolidar una base de datos

unificada. El universo de estudio se fue delimitando inicialmente en torno al total de proyectos de investigación que fueron desarrollados durante 2021 (Año T) en las instituciones estudiadas y provenían de diferentes ventanillas de acreditación: Proyectos de Incentivos, de Acreditación Interna o de Reconocimiento Institucional (según las denominaciones de cada institución universitaria), PIP / PUE / PIO [CONICET] y PICT / PISAC-COVID [ANPCyT], no identificándose proyectos de naturaleza investigativa acreditados/financiados por entes extranjeros. Posteriormente, aplicamos nuevos filtros a fin de consolidar la información:

- El primero fue temporal, seleccionando todos los proyectos otorgados en las convocatorias que mediaron entre 2018 y 2020, encontrándose vigentes al año T; considerando la duración de ejecución de cada tipología de proyectos, que según el caso podían ser de cuatro, tres y dos años. Hay que mencionar, como dato importante que la explosión de la pandemia generó un inusitado movimiento en la duración de los proyectos. Así, varios fueron extendidos, por ejemplo, en el caso de la UN San Juan, los proyectos internos bianuales, se reconvirtieron en trianuales. Para los fines de este trabajo, entonces, el criterio de selección de los diferentes tipos de proyectos es que se encontraran efectivamente en ejecución al año 2021.
- El segundo filtro, y tal vez el más relevante a los fines de este trabajo, fue el rastreo y clasificación de la información verificando para cada una de las universidades (e indagando incluso en ciertos casos a nivel de sus unidades académicas) su efectivo anclaje en el área de las ciencias sociales.
- En tercer lugar, se procedió a filtrar los proyectos de acuerdo con los datos de sus directores/as, con la intención de evitar la duplicación de información, dado que muchos/as de ellos participan simultáneamente en la dirección de proyectos procedentes de diferentes ventanillas de acreditación.

Finalmente, a partir del relevamiento desarrollado y sistematización de las diferentes fuentes de información disponibles, estabilizamos dos grandes bases de datos. La primera, sistematiza un total de setecientos noventa y dos proyectos de ciencias sociales ejecutados en las diez universidades seleccionadas para el estudio durante 2021

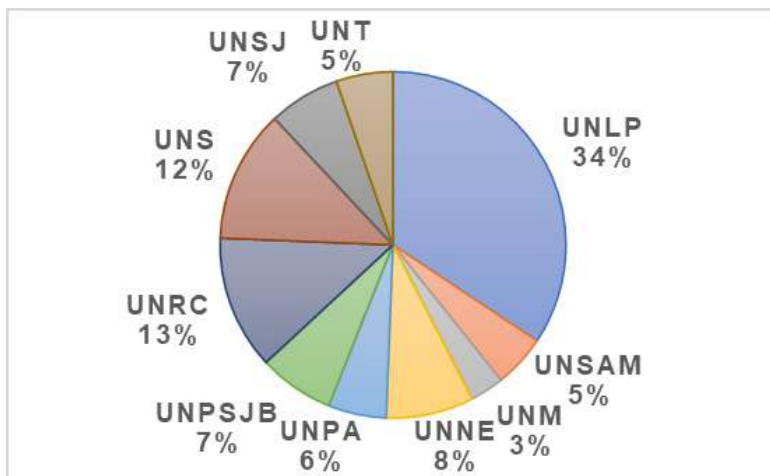
y fue organizada según tipos de proyectos, año de otorgamiento, duración, títulos, disciplinas de abordaje, campos temáticos de aplicación, líneas de investigación y alcance geográfico. En cuanto a la segunda, referencia los setecientos treinta y tres directores/as de dichos proyectos, dando cuenta de algunas características socio-demográficas y académicas de interés como género, filiación a CONICET y autoadscripción disciplinar.

Resultados

Morfología de los proyectos universitarios de investigación y sus directores/as

El total de setecientos noventa y dos proyectos de I+D ejecutados durante 2021 en las universidades nacionales seleccionadas, asume una distribución heterogenia con unos rasgos interesantes para destacar.

Gráfico 5. Cantidad de proyectos de I+D de ciencias sociales según Universidades Nacionales de ejecución. Año 2021, en valores relativos



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Universidades Nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

La UN La Plata destaca por concentrar la mayor cantidad de proyectos (34 %), ello en clara sintonía con su tamaño institucional, antigüedad (que se ha traducido en importantes cuotas de prestigio

académico) y claramente su emplazamiento geográfico en el área metropolitana del país. En segundo lugar, y con más de 20 % de diferencia, se ubican recién la UN de Río Cuarto (13 %), seguida muy de cerca por la UN del Sur (12 %).

El resto de las instituciones amalgaman menos de 10 % de proyectos cada una, destacándose la UN de Noreste (8 %) y la UN de San Juan y de la Patagonia San Juan Bosco que comparten un 7 %. Les siguen la UN de la Patagonia Austral (6 %), Tucumán (5 %) y Moreno (5 %) que presentan la menor cantidad de proyectos en ejecución.

Vale en este punto hacer referencia a los/las directores/as de los mismos. Existe un total de 733 personas que ejercen la dirección de los proyectos de I+D de ciencias sociales en las Universidades Nacionales seleccionadas; siendo el 60,3 % mujeres y el 39,7 % varones. De este modo, puede advertirse que existe una clara feminización en la dirección de estos.

A continuación, se presenta una tabla con la adscripción disciplinar de los y las directores/as de dichos proyectos.

Tabla 2. Adscripción disciplinar de directores y directoras de proyectos de I+D. Año 2021

DISCIPLINA	DIRECTORES/AS	%
Ciencia política	40	5 %
Ciencias de la educación	126	17 %
Comunicación y medios	60	8 %
Derecho	61	8 %
Economía y negocios	134	18 %
Geografía económica y social	63	9 %
Psicología	45	6 %
Sociología	93	13 %
Otras ciencias sociales	111	15 %
Total	733	100 %

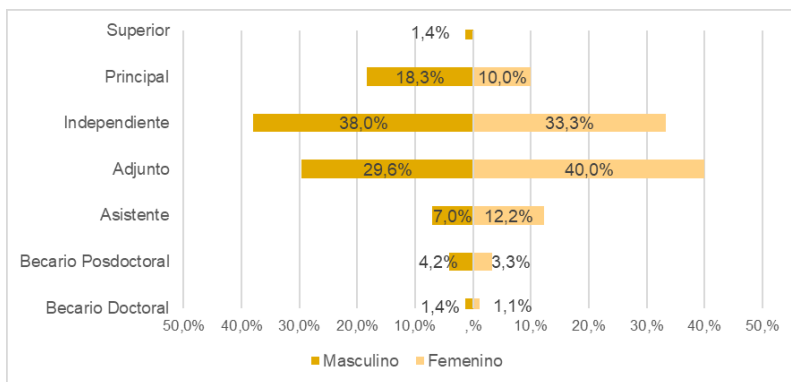
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Universidades Nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

Del total de directores y directoras registrados, como se puede observar, la mayor cantidad se adscriben en la disciplina economía y negocios (18 %), ciencias de la educación (17 %) y sociología (13 %). Destaca también con un 15 % la categoría “otras ciencias sociales”, que lejos de ser residual merece ser considerada en su especificidad, ya que indica la autoadscripción de los y las investigadores/as en las disciplinas que revisten su interés. En nuestras indagaciones hemos podido advertir que dicha categoría incluye investigadores/as que asumen como disciplinas de referencia la antropología social y arqueología social, historia social, trabajo social, bibliotecología, estadística social, entre otras. Cabe destacar también que las disciplinas menos referenciadas por los y las directoras de proyectos son ciencia política (5 %) y psicología (6 %).

Como hemos visto en las páginas precedentes, existe una relación simbiótica entre el CONICET y las universidades nacionales y en ambos espacios circulan docentes-investigadores/as, becarios y personal técnico. Además, ambas instituciones comparten institutos de doble dependencia y varios de los proyectos de investigación acreditados por uno u otro espacio son dirigidos por personas que comparten la doble filiación institucional. De allí que interese conocer la pertenencia o no pertenencia al CONICET de los y las directores/as de los proyectos bajo estudio y la categoría que detentan dentro del Consejo.

De los resultados obtenidos, se puede indicar que de los setecientos treinta y tres directores/as de proyectos solamente ciento ochenta y seis integran la Carrera del Investigador/a Científico del CONICET, representando el 22 % de quienes ejercen la dirección de proyectos de ciencias sociales en las universidades abordadas. En relación a ello, el siguiente gráfico presenta la distribución de los y las directores/as pertenecientes a alguno de los escalafones del CONICET según género.

Gráfico 6. Directores/as de proyectos con afiliación simultánea en CONICET, según categoría CIC y género. Año 2021



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales y CONICET (2021).

La pirámide poblacional antepuesta relativa a directores/as que pertenecen al área de las ciencias sociales del CONICET, presenta una estructura compatible con el tipo regresiva, ya que tanto la base como la cúspide son aplanadas, presentándose para las categorías “Principal” y “Superior” una mayor concentración de directores (casi un 20 % entre ambas categorías) y solo un 10 % son mujeres. Vale decir que para la categoría Superior del CONICET no hay mujeres ejerciendo la dirección de proyectos. También observamos que hay una mayor concentración en la zona intermedia de la pirámide, es decir, entre las categorías de independiente y adjunto.

En la primera categoría, hay una primacía de varones directores de proyectos (38 %) sobre las directoras (33,3 %). Esta tendencia es opuesta para la categoría adjunto, siendo el 40 % mujeres y el 29,6 % varones. Los directores del escalafón asistente alcanzan un 7 %, frente a una primacía de mujeres que conforman el 12,2 %. En cuanto a las y los directores que aún se desempeñan como becarios/as del Consejo (no guardando una relación de dependencia laboral) representan el 10 % del total del universo en estudio, considerando las categorías doctorales y posdoctorales. Respecto a este sector, existe una leve diferencia porcentual a favor de los varones: el 5,6 % son directores becarios y el 4,4 % son directoras becarias.

Otro rasgo interesante para destacar respecto a los proyectos universitarios de I+D se vincula con las diversas fuentes de acreditación y financiamiento que las universidades nacionales brindan y/o reciben y destinan.

Tabla 3. Organismos de financiamiento de los proyectos de I+D en ciencias sociales. Año 2021

Organismo de financiamiento	Total	Total %
ANPCyT	68	8,6 %
CONICET	30	3,8 %
Universidad Nacional	694	87,6 %
Total	792	100 %

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

Los datos anteriores sugieren que el financiamiento para proyectos universitarios de investigación proviene principalmente de fondos de las propias universidades,¹ es decir, el 87,6 % de previsiones de financiación en lo que se refiere a actividades de investigación científica y técnica es costeadas internamente. En segundo lugar, y muy lejos, se encuentra la ANPCYT que financia el 8,6 % de los proyectos para el área de ciencias sociales al 2021, destacándose las ventanillas de proyectos PICT y PISAC-COVID.

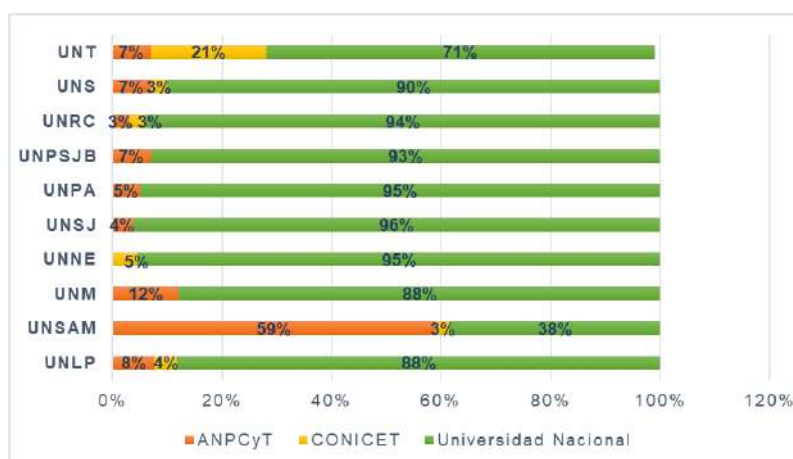
Respecto a estos últimos, es preciso mencionar que fueron promovidos desde la Agencia como una forma de dar respuesta a los efectos de la pandemia generada por el SARS-COV-2. En ese sentido, el propósito de los mismos es promover nuevos conocimientos enfocados en el estudio de la sociedad argentina en la pandemia y, en especial, en la postpandemia. Del total de 19 proyectos financiados por la Agencia, tenemos registro de un total de 5 en nuestras bases

[1] Es importante destacar que no se obtuvo información homogénea para los casos de las universidades en estudio que den cuenta de proyectos de investigación acreditados y financiados por organismos extranjeros, por lo que no fueron abordados para este trabajo en particular.

de datos, para las instituciones abordadas. Como ejemplo, puede mencionarse uno de ellos denominado “Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes en Argentina 2020-2021: análisis dinámico de las reconfiguraciones provocadas por la pandemia COVID-19 sobre las políticas nacionales- provinciales-locales y su impacto en la estructura social”, en cuya ejecución participan precisamente dos de las universidades seleccionadas como nodos: la UNLP y la UNSJ.

Por otro lado, y retomando el análisis de la tabla 3, podemos decir que casi el 4 % de los proyectos del área de ciencias sociales son financiados por el CONICET (nos referimos a los PIP, PUE y PIO) que consisten en proyectos destinados a financiar parcialmente los trabajos de investigación en que participan los miembros de su carrera científica.

Gráfico 7. Proyectos de I+D en ciencias sociales, según Universidades Nacionales de ejecución y organismo acreditante. Año 2021



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

Con relación a los organismos que acreditan y/o financian proyectos de investigación en ciencias sociales, la gran mayoría se sustentan con recursos provenientes de las propias universidades, oscilando entre el 70 % y 96 % del total. En complemento, una baja proporción de ellos es auxiliada por recursos del CONICET y de

la ANPCyT. Como podemos apreciar en el gráfico, existen algunas interesantes especificidades.

La UN de Tucumán destaca por su mayor heterogeneidad en las fuentes de acreditación de proyectos: si bien posee un alto nivel de financiamiento propio (71 %), cuenta con un significativo 21 % de proyectos financiados por el CONICET y 7 % por la ANPCyT. Pero existen también algunos casos extremos que interesa destacar. Entre las universidades abordadas, la UN San Juan constituye la institución más endogámica en materia de financiamiento/acreditación de proyectos, pues sostiene con recursos propios los procesos de I+D en un 96 %.

En otro extremo, sobresale la UN San Martín que presenta la mayor cantidad de proyectos acreditados y financiados por fuentes externas, alcanzando el 62 % del total; de ellos el 59 % son estimulados por recursos de la ANPCyT y el 3 % adicional por el CONICET, destacándose entre las instituciones bajo estudio por ser la que menos acredita/financia proyectos con recursos propios (solo 38 %). Entre los proyectos de acreditación interna de la UNSAM se destacan los Proyectos de Reconocimiento Institucional [PRI] que fueron creados para darle un marco institucional a sus propios procesos de producción de conocimiento. Por otro lado, destacan también cuatro universidades (Patagonia San Juan Bosco, Patagonia Austral, San Juan y Moreno) en las que no existen proyectos de ciencias sociales, ejecutados bajo la convocatoria de CONICET. En estos casos, existe una fuerte presencia de proyectos acreditados/financiados internamente (oscilando entre un 88 % y 93 % del total).

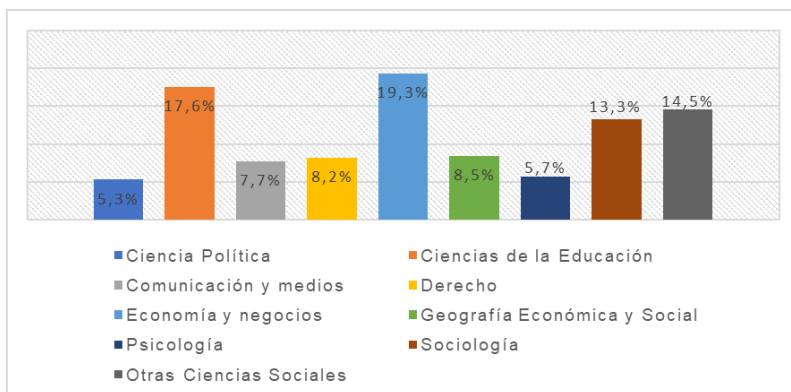
Doble faz de las agendas de investigación en ciencias sociales: escalas geográficas y campos temáticos de aplicación

Todo proceso de construcción de conocimientos conlleva siempre cierta direccionalidad, en términos de la definición del objeto de estudio que interesa indagar. De allí que para comprender más acabadamente la configuración de los proyectos de I+D de las universidades en estudio, resulta imprescindible explorar *qué se investiga*. Entonces, es necesario entender hacia qué objetivos se dirigen los recursos de la investigación (Senejko y Versino, 2019) o, en otros términos, cómo se configuran sus *agendas de investigación*, comprendidas como una agrupación de objetos de estudio de un área específica del saber, desarrollada por investigadores/as que profundizan ciertas temáticas

a fin de construir nuevos conocimientos (Fuentealba, Gajardo y Alaluf, 2017).

En cuanto a las dimensiones de abordaje, se ha recuperado el Manual de indicadores del CECIC (2020) y reconocido a partir de allí dos niveles de análisis: el alcance geográfico y la estructura temática-disciplinar de las agendas, que consideramos constituyen una suerte de doble faz en su determinación. Uno de los niveles refiere a la focalización geográfica de las mismas, esto es: cuáles son los espacios / latitudes abordadas en los temas que se investigan en los proyectos bajo estudio. Respecto al otro nivel, da cuenta de los campos temáticos de aplicación de dichos proyectos, vale decir que es lo que se investiga, cuáles son los temas que se abordan, ponen en discusión y/o proponen innovaciones. Pero veamos el comportamiento de cada uno de estos niveles en el caso de las universidades nacionales examinadas.

Gráfico 8. Cantidad de proyectos de I+D en ciencias sociales, según disciplinas. Año 2021



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

A los fines de este estudio, para clasificar los espacios disciplinares dentro del gran área de las ciencias sociales se tomó como base la propuesta de disciplinas del Sistema de Gestión y Evaluación [SIGEVA] instrumentado en prácticamente todo el sistema universitario nacional. Las disciplinas consideradas son: ciencia política, ciencias de la educación, comunicación y medios, derecho, economía y negocios, geografía económica y social, psicología, sociología y otras ciencias sociales

En función de ello y a partir de los datos visualizados en el gráfico anterior, se puede manifestar que existe una distribución relativamente equitativa entre los diferentes espacios disciplinares, con algunos trazos de interés para destacar: el 19,3 % de los proyectos se dedican a investigar temáticas vinculadas con la economía y negocios, seguidos por estudios de ciencias de la educación (17,6 %). Luego, con el 13,3 % se encuentran los proyectos dedicados a estudios sociológicos. Con menos del 10 % encontramos proyectos anclados en geografía económica y social (8,5 %), derecho (8,2 %), comunicación y medios (7,7 %) y, con un poco más de 5 % los proyectos dedicados a estudios de psicología y ciencia política.

Un dato relevante para mencionar lo constituye el alto porcentaje de proyectos anclados en “otras ciencias sociales” que alcanza un 14,5 % y como dijimos para el caso de los directores/as de proyectos incluye áreas variadas de interés como antropología, trabajo social y hasta bibliotecología, entre varias otras.

A partir de lo antedicho, interesa observar la configuración de las agendas de investigación, esto es detenernos en la direccionalidad y objetivos asumidos por los recursos de la investigación (Senejko y Versino, 2019). Respecto a ello hemos advertido un peso diferencial de escalas geográficas de abordaje y múltiples campos temáticos de ampliación.

En cuanto a las escalas geográficas, cabe destacar que, con frecuencia, constituye uno de los elementos intervinientes en el proceso de construcción de todo objeto de estudio, implicando para los investigadores/as la necesidad de seleccionar el nivel de agregación y simplificación del fenómeno a indagar, así como sus límites. De acuerdo con Ruiz Rivera y Galicia, constituye un “instrumento conceptual que trasciende la mera ubicación y extensión de un fenómeno como el elemento definitorio de su condición geográfica, y, por el contrario, visibiliza las relaciones espaciales sociales y biofísicas que lo constituyen” (Ruiz Rivera y Galicia, 2016, p. 151). Su definición conlleva, en efecto tanto una dimensión *epistemológica*, relativa a la observación científica como una *ontológica* referida a los elementos intrínsecos del/los fenómenos que se abordarán (Sayre, 2005).

En este trabajo, para romper con una mera lectura dual que podría encerrarnos en una lógica nacional versus global, de acuerdo con el planteo desarrollado en los apartados precedentes, hemos establecido 4 escalas geográficas que estimamos coadyuvarán a comprender la

delimitación de los objetos de estudio en las agendas de investigación: dentro del ámbito “nacional” diferenciamos lo propiamente “local” y dentro de lo “internacional”, el espacio regional “latinoamericano”. Estas escalas permiten identificar y clasificar la variedad de referencias geográficas delimitadas en las agendas de los proyectos de investigación bajo estudio.

Tabla 4. Agendas de investigación de las universidades nacionales, según escalas geográficas

Alcance geográfico	Cantidad	%
Estudios locales	336	42,4 %
Estudios nacionales	237	29,9 %
Estudios latinoamericanos	54	6,8 %
Estudios internacionales	19	2,4 %
Estudios transversales	146	18,4 %
Total	792	100 %

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

Los estudios “locales” refieren a proyectos que focalizan su lente de análisis en la zona de influencia de la universidad, incluyendo tanto el ámbito intra-institucional como el entorno territorial más próximo, tipo municipal y/o de localidades colindantes. En esta dimensión se encuentra, por ejemplo, el proyecto “Indicadores ambientales en el sistema metropolitano de Tucumán. El espacio urbano como un derecho”, o “Representaciones sociales sobre salud y trabajo y sus transformaciones en estudiantes universitarixs de la carrera de Trabajo Social”.

En cuanto a lo “nacional” enmarca estudios que abordan temáticas situadas en otras zonas del territorio argentino, excluyendo a fines analíticos lo propiamente local. En esta categoría se incorporaron proyectos que focalizan en una o más provincias argentinas, como los proyectos denominados “Territorio y economía. Estudio de cadenas productivas en espacios urbanos y rurales en la Argentina actual”

e “Indicadores de circulación del conocimiento en universidades periféricas de Argentina: un estudio integral sobre los modos de producción y vinculación científico-tecnológica en las Universidades Nacionales de San Juan, Catamarca y del Sur”.

Con respecto a lo “latinoamericano”, corresponde a proyectos de investigación que indagan temáticas de alcance más bien regional, incluyendo aquellos trabajos que implicaban una comparación con el caso argentino y que no fueron capturados analíticamente en la categoría anterior. Se trata de estudios que focalizan explícitamente en países de América Latina o casos que, aunque no lo expliciten, abarquen en su temática esta zona de influencia, por ejemplo: “Dimensiones de salud en las encuestas de hogares de América Latina” y “La Brecha Digital: un reto para el desarrollo educativo y productivo en la Región Cordillerana”.

Finalmente, lo “internacional” (que excluye lo latinoamericano a los fines analíticos, evitando así la duplicación de registros y permitiendo valorar tanto lo intra como extrarregional) refiere a investigaciones focalizadas en otros espacios del extranjero, aun cuando se trate de comparaciones con el caso argentino. Ejemplo de ellas son: “Acción política, economía y religión. Subordinación y resistencia en el Imperio romano y el tardoantiguo” y “La Patagonia Sur como espacio global de acumulación de capital transnacional”.

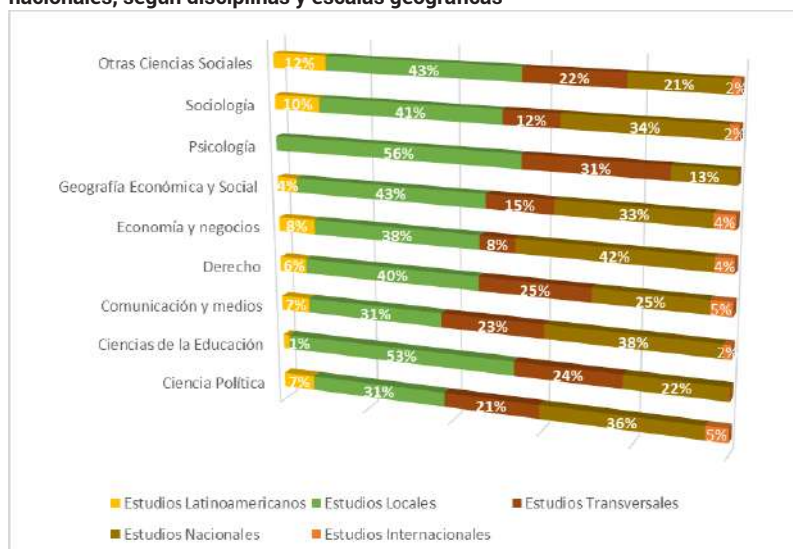
Ahora bien, durante el análisis de las agendas de los proyectos de investigación, hemos detectado una importante cantidad de estudios sin un anclaje geográfico específico. Dado que la naturaleza de ciertos temas investigados por los proyectos en cuestión, no se restringen a una escala geográfica particular, sino que transitan por más de uno de dichos circuitos, optamos por plantear un indicador “transversal”. Se trata de temáticas que exceden límites precisos y tienen injerencia más bien en ámbitos globales o implican a varias de las escalas mencionadas, como los proyectos “Pensar el turismo desde la transdisciplinariedad. Aportes desde las ciencias sociales y humanas” y “Violencias, derechos y política pública: Tensiones entre el interés superior del niño/a y la perspectiva de género”.

Del análisis realizado se desprende que la mayor parte de los proyectos de ciencias sociales de las universidades seleccionadas (el 42,4 %) corresponden a estudios locales, mientras que el 29,9 % refieren a abordajes de espacios nacionales y el 6,8 % se centra en estudios con eje en Latinoamérica. Por su parte, el 18,4 % investigan

temáticas transversales (sin un anclaje geográfico específico) y solo el 2,4 % de los proyectos en cuestión abordan temáticas vinculadas a países fuera de la región.

A continuación, se estima pertinente indagar la relación entre los tipos de alcances geográficos de los proyectos y las respectivas disciplinas de ciencias sociales.

Gráfico 9. Agendas de investigación de ciencias sociales en universidades nacionales, según disciplinas y escalas geográficas



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

Como ya fue mencionado, las ciencias sociales se dedican mayoritariamente a estudios nacionales y locales. Conforme al gráfico precedente, interesa focalizar en algunas disciplinas que revisten interés analítico respecto a las escalas de abordaje de sus temas de investigación. Ciencias de la educación y la psicología, por ejemplo, no presentan abordajes internacionales ni tampoco se registran estudios de alcance latinoamericano. En psicología las investigaciones se enfocan en áreas locales (56 %), seguidos por estudios transversales (31 %, siendo la disciplina con mayor cantidad de proyectos abordados desde este enfoque) y nacionales (13 %). Por su parte, las ciencias de la educación se dedican en un 53 % a estudios

con anclaje local, un 24 % transversal y un 22 % nacional. Economía y negocios, comunicación y medios y ciencia política constituyen las disciplinas con mayor abordaje de estudios nacionales: 42, 38 y 36 % respectivamente.

Otro dato a destacar es que la mayor cantidad de investigaciones de derecho, se enmarcan también en la escala local, y hay una paridad en cuanto a estudios nacionales y transversales (25 %). Por su parte, las investigaciones enmarcadas en sociología, en su mayoría (41 %) se dedican a realizar estudios locales, seguidos por estudios nacionales (34 %) y un 12 % realiza investigaciones con anclaje transversal. Respecto a los abordajes internacionales y latinoamericanos que son minoría en el ámbito de las investigaciones de ciencias sociales, sobresalen con un 5 % en derecho y ciencia política para el primer caso y en sociología y economía y negocios para el segundo (concentrando un 10 % y 8 % para cada disciplina respectivamente).

Ahora bien, para conocer las agendas de los diferentes proyectos de investigación en ejecución es necesario indagar, además de las escalas implicadas en el diseño de sus objetos de estudio, en las temáticas que se abordan. En este trabajo, para dar cuenta de los temas que investigan las ciencias sociales, se tomó como base el criterio de clasificación en “campos de aplicación” según las categorías previstas en el sistema SIGEVA de las universidades, específicamente en la pestaña proyectos. En total se reperfilaron ocho clasificaciones, en función de la propuesta del SIGEVA, que puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 5. Proyectos de investigación de ciencias sociales, según campos temáticos

Campo Temático	Cantidad	%
Campos Múltiples	47	5,9 %
Ciencia y Cultura	207	26,1 %
Defensa y Seguridad	38	4,8 %
Desarrollo Socioeconómico y Servicios	173	21,8 %
Ordenamiento Territorial	82	10,4 %

Campo Temático	Cantidad	%
Promoción General del Conocimiento/Cs Sociales	148	18,7 %
Salud Humana	51	6,4 %
Otros campos	46	5,8 %
Total	792	100 %

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

A partir de los datos presentados, se puede inferir que la mayor proporción de temas en la agenda investigativa en el área de ciencias sociales corresponde al campo de ciencia y cultura (26,1 %). Uno de los proyectos allí incluidos que sirve de ejemplo es “Claves para repensar y resignificar ideas y prácticas culturales del norte grande argentino. Alternativas transdisciplinarias desde el sur de América”. Le siguen con casi un 22 % proyectos que abordan temáticas vinculadas al campo desarrollo socioeconómico y servicios. En este caso, valga como ejemplo el proyecto denominado “MERCOSUR-Alianza del Pacífico en un contexto de incertidumbre. Viabilidad de una convergencia futura”.

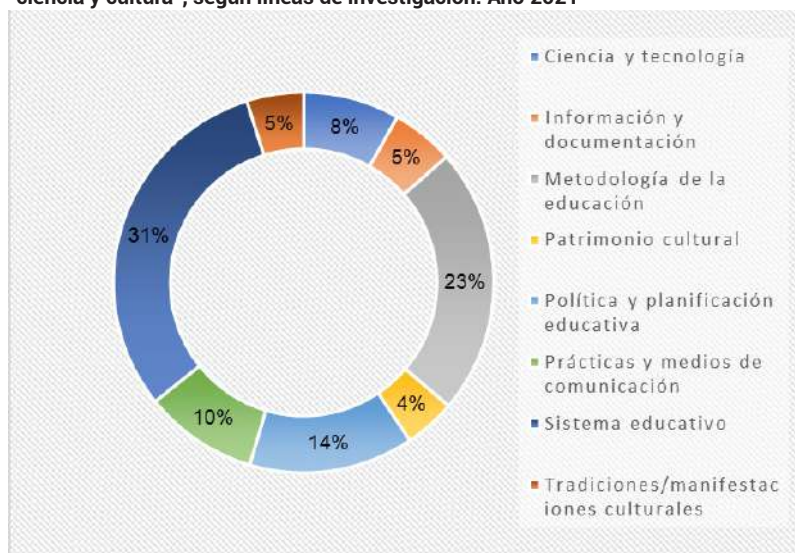
Cabe destacar que, en tercer lugar, se ubican los estudios sobre promoción general del conocimiento / Cs. Sociales (18,7 %) y entre los campos temáticos que menor proporción de proyectos tienen, se destaca defensa y seguridad (4,8 %).

Mención especial merece la categoría denominada campos múltiples (5,9 %), es decir, son aquellos proyectos que tienen dos o más campos interconectados, es decir, implican una articulación de enfoques o líneas. Por ejemplo, el proyecto “Investigación científica, problemas sanitarios y políticas sociales: la alimentación en Argentina entre fines de la década de 1920 y mediados de la década de 1940”.

A continuación, focalizamos en algunos campos temáticos en particular que estimamos requieren acercar el lente de análisis y detallar sus especificidades. Ellos son ciencia y cultura, por ser el campo que más representación tiene. También interesa focalizar en el campo temático relativo a la promoción general del conocimiento, en tanto es uno de los campos de autoadscripción más frecuente en los

proyectos de investigación y porque, además, el sistema SIGEVA no ofrece a los y las investigadores/as líneas de investigación específicas como en los otros campos. Por ello, en este caso, se realizó un proceso de clasificación de las distintas líneas de indagación temática declaradas por los y las propios/as directores/as de proyectos.

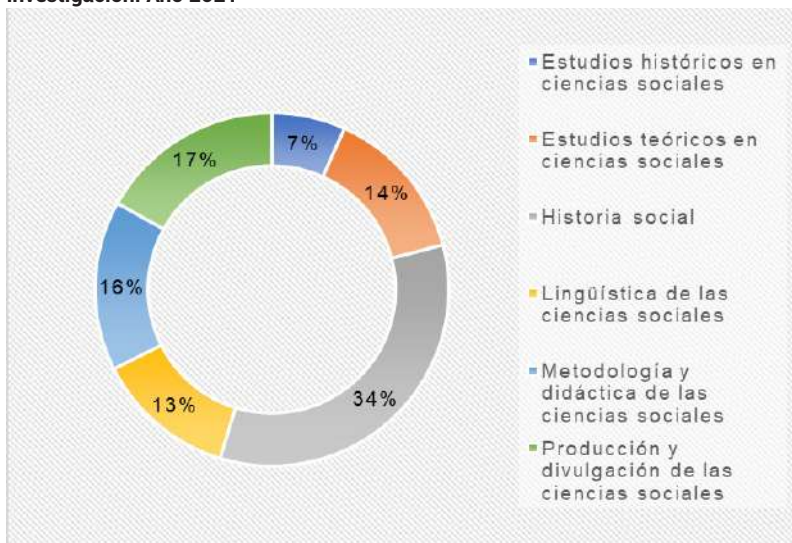
Gráfico 10. Proyectos de I+D en ciencias sociales, nucleados en el campo temático "ciencia y cultura", según líneas de investigación. Año 2021



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

Como se observó en el apartado anterior, el campo de la ciencia y la cultura, es el que mayor cantidad de investigaciones registra. En ese sentido, consideramos interesante explorar las diferentes líneas temáticas que estudian los y las investigadores/as inscriptos/as en esa área. La temática sobre el sistema educativo concentra la mayor cantidad de investigaciones (31 %), mencionando a modo ilustrativo el proyecto “Delegación de los valles sanjuaninos de la UNSJ: democratizando la universidad”. Luego se ubican las metodologías de la educación (23 %), siendo un ejemplo el proyecto denominado “Educación primaria a través de los dispositivos escolares en la Patagonia Austral” y finalmente destaca la línea de investigación relativa a política y planificación educativa (14 %).

Gráfico 11. Proyectos de I+D en ciencias sociales, nucleados en el campo temático “promoción general del conocimiento / Cs. sociales”, según líneas de investigación. Año 2021



Fuente: Elaboración propia, con base en datos de universidades nacionales, ANPCyT y CONICET (2021).

En relación con el campo temático de la promoción general del conocimiento en ciencias sociales, la historia social concentra el 34 % de los proyectos de I+D, incluyendo por ejemplo el proyecto denominado: “Estudio de historia comparada de la Patagonia austral Argentina-chilena: dimensiones de historia política de los trabajadores y de la educación 1880-1950”. Luego se ubica la producción y divulgación de las ciencias sociales (17 %), siendo un ejemplo de ello “La evaluación de las producciones científicas en ciencias humanas y sociales en contextos institucionales de la región NEA”. Finalmente, y muy cerca, se ubica la metodología y didáctica de las ciencias sociales, con el 16 % de las temáticas investigadas.

Discusión y conclusiones

A lo largo de estas páginas, hemos visto que existe una desigualdad de tipo histórica y estructural en los procesos de producción y circulación de conocimientos en todo el mundo, motorizada desde los mismos *centros de excelencia* localizados en los llamados países

centrales, que ha tendido a invisibilizar la producción científica de las comunidades *periféricas*. Ello ha cristalizado, como vimos, en el Sistema Académico Mundial cuya estructura dicotómica y desigual está en gran medida sostenida por la monopolización de sistemas de indexación e indicadores bibliométricos —impulsados originariamente por el Institute of Scientific Information [ISI] y otras nuevas y grandes corporaciones editoriales— que vienen promoviendo y consolidando una ingeniería de parámetros de evaluación de las producciones científicas, conllevando a que durante casi medio siglo ciertas instituciones, disciplinas, formatos de publicación e idiomas específicos acumulasen un capital científico diferencial.

Inscripto en estas tramas, en las últimas décadas, el campo científico-universitario argentino se ha consolidado como un *centro* académico sin perder por ello su condición de periferialidad, identificándose diversos niveles de producción / circulación de conocimientos y de consagración académica entre instituciones, disciplinas y zonas geográficas. Si bien se trata de un espacio predominantemente público (cuyos ejes de rotación son esencialmente el CONICET y las universidades nacionales), ha asumido un carácter fuertemente heterogéneo en cuanto a la distribución de recursos materiales y humanos materializada a niveles inter e intra institucionales. Por ejemplo, mientras algunas instituciones, especialmente aquellas situadas en la región metropolitana del país, han logrado que algunos de sus conocimientos circulen y sean reconocidos (más o menos marginalmente) en los nodos principales del SAM donde transita básicamente la producción científica de los *centros de excelencia*; otras producciones de docentes-investigadores/as circulan por espacios heterogéneos, incluyendo circuitos latinoamericanos, redes nacionales y entornos locales.

A lo largo de estas páginas, hemos demostrado que existe una fuerte tendencia a la reflexión sobre qué tipo de ciencia se genera en el país, cómo, dónde y hacia quién está dirigida, lo cual promueve y valida la indagación principal del trabajo sobre el alcance y conformación de los proyectos de I+D y las mismas agendas universitarias de investigación. De allí que el devenir y configuración de estos en un centro científico periférico como es Argentina, deba entenderse como engranajes de un proceso dinámico en el que interactúan fuerzas *endógenas* desplegadas en el escenario de tensiones internas del mismo campo científico-universitario (y cristalizada cotidianamente en las labores

de investigación dentro de cada laboratorio, centro o instituto), y otras *exógenas* devenidas de las históricas intervenciones del poder gubernamental (y materializada en las políticas públicas destinadas al sector) e interacciones con actores sociales, empresariales o propiamente académicos (sean locales, nacionales o transnacionales).

Por ello, el interés del presente trabajo de focalizar en las universidades nacionales seleccionadas, dado que por sus localizaciones geográficas, tamaños, antigüedad y estructura organizativa de sus funciones misionales, constituyen instituciones públicas destacadas en el plano nacional e internacional en materia de I+D, por lo que abordar el alcance y configuración de sus proyectos y agendas de investigación resulta relevante en tanto dimensión fundamental de los procesos de producción de conocimientos.

Precisamente, entre las principales potencialidades de este trabajo se cuentan el promover una instancia de reconocimiento del alcance de las capacidades endógenas de los grupos de académicos intervinientes en las instituciones, enraizados en el área de ciencias sociales, y también del desarrollo diferencial entre las universidades abordadas, los tipos de saberes allí desplegados (sean más especializados o mediante enfoques integrales) así como las múltiples escalas geográficas de abordaje implicadas en sus agendas científicas (distinguiendo temáticas locales, nacionales, internacionales y/o transversales).

El presente trabajo ha contribuido, entonces, a indagar el habitual y complejo proceso de configuración de las agendas universitarias de investigación en Argentina, desplegando un estudio de nivel institucional. Respecto a ello, cabe destacar algunos trazos importantes de los perfiles de las 10 instituciones indagadas.

- En clara sintonía con su tamaño institucional, antigüedad y emplazamiento geográfico en el área metropolitana del país, la UNLP monopoliza la mayor cantidad de proyectos de I+D bajo análisis (34 % de un total de 792), siendo la UN de Moreno un claro contraste (apenas 5 % del total).
- Respecto al universo de directores/as de dichos proyectos, cabe destacar tres aspectos fundamentales: el 60 % corresponde a mujeres, evidenciándose una fuerte feminización en los equipos de dirección de proyectos de ciencias sociales; si bien hay una distribución relativamente homogénea respecto a su procedencia

disciplinar la mayoría (el 35 %) proviene de disciplinas como economía y negocios y ciencias de la educación; y solo el 22 % de ellos/as integran la Carrera del Investigador/a Científico del CONICET.

- En promedio, el 90 % de los proyectos universitarios de investigación de las universidades abordadas son acreditados y financiados con recursos propios, destacándose la UN San Juan con un 96 % de proyectos autofinanciados. Puede apreciarse, entonces, que existe una baja proporción de investigaciones universitarias auxiliadas por fondos del CONICET o la ANPCyT, siendo la UN San Martín, la institución con menos cantidad de proyectos de reconocimiento institucional, sostenida más bien por fuentes nacionales de financiamiento. En efecto, son los propios investigadores/as quienes deben buscar recursos para ejecutar sus proyectos. Ello podría significar cierta direccionalidad en lo que Knorr Cetina y Cicourel (1981) han denominado “relaciones de recursos”, refiriéndose a las relaciones con diversos actores externos a la institución que resultan indispensables para poner en marcha la fabricación de conocimientos y cuyas condiciones y condicionamientos para la acreditación y otorgamiento de subsidios se traducen también en un relativo corsé para la configuración de las agendas y equipos mismos de investigación.
- Otro de los hallazgos importantes alcanzados mediante este trabajo, es que la mayor cantidad de los proyectos ejecutados en las universidades seleccionadas, se desarrollan en el área de economía y negocios (19,3 %), ciencias de la educación (17,6 %) y sociología (13,3 %). Destaca también una gran cantidad de proyectos nucleados en “otras ciencias sociales” (14,5 %) referenciándose áreas variadas como antropología, trabajo social y bibliotecología.

Hemos indagado también las “agendas de investigación” en ciencias sociales, esto es los temas sobre los cuales versan los proyectos de investigación acreditados y/o financiados por las universidades. Respecto a su configuración, consideramos que se hallan relativamente influenciadas por diversos factores, algunos de índole interna (cristalizados en los intereses de los mismos investigadores/as hasta las demandas de las propias instituciones) y otros externos (donde sopesan el contexto político-social y el alcance de las políticas públicas nacionales e internacionales).

La definición de toda agenda investigativa conlleva, entonces, relativos márgenes de autonomía individual, colectiva e institucional. Partiendo de reconocer, entonces, la multiplicidad de factores intervinientes en la configuración de las agendas universitarias de investigación, en este trabajo hemos delimitado la indagación en torno a dos niveles de análisis, recuperando como dijimos el bloque de indicadores propuesto por el Manual de Cuyo: sus escalas geográficas de abordaje y sus campos temáticos de aplicación.

A modo general, se pueden señalar los siguientes aspectos:

- Las universidades bajo estudio presentan una fuerte orientación, en lo que refiere a las escalas geográficas de abordaje de la investigación, hacia los estudios locales (42,4 %, principalmente en las áreas de ciencias de la educación) y nacionales (30 %, con preeminencia en las disciplinas de economía y negocios, derecho y ciencia política). Resulta significativo el bajo porcentaje de proyectos que tratan estudios sobre otros países (incluyendo abordajes comparativos con Argentina): latinoamericanos (6,8 %) e internacionales (apenas 2,4 %). Del análisis realizado, destacan las disciplinas correspondientes a Ciencias de la educación y psicología, pues directamente no presentan abordajes internacionales ni estudios de alcance latinoamericano. Asimismo, hay que recordar que, dada la naturaleza de las investigaciones en ciencias sociales, se añadió una nueva categoría en las escalas de circulación, es la referida a los proyectos transversales, que nuclea un 18,4 % del total de las investigaciones.
- Otro asunto que asume notoriedad en el trabajo, es la pregunta sobre: ¿cómo fueron conformadas las agendas de investigación y qué temas/problemas o líneas de investigación en ciencias sociales vienen siendo abordadas en las universidades? Respecto a ello, se puede aseverar que los campos temáticos mayormente estudiados son: ciencia y cultura (26 %) y desarrollo socioeconómico y servicios (22 %). En contraste, los temas que menos se investigan a través de los proyectos de ciencias sociales corresponde al campo defensa y seguridad (4,8 %). Un proyecto ejemplo de este campo es “Poder Judicial: Legitimidad y reforma. Del *lawfare* al control de políticas públicas y ampliación de derechos”.

En definitiva, consideramos que el grueso de las investigaciones argentinas en ciencias sociales escapa al circuito científico mainstream, destacándose una significativa producción de conocimiento en las universidades públicas del país, centrada en gran medida en abordajes locales y nacionales y en estudios vinculados a temáticas de gran relevancia y sensibilidad social como los campos de ciencia y cultura, desarrollo socioeconómico y servicios, defensa y seguridad o salud humana. Este último campo reviste gran interés en el contexto actual y se perfila como una de las áreas de mayor proyección para los próximos años, pues en ella se nuclea proyectos como: “EPJA y covid: transformaciones en las políticas, las instituciones y los sujetos en las provincias de Chaco y Corrientes”.

También de nuestra investigación se desprenden ciertos campos emergentes de gran relevancia, aglutinados habitualmente en la categoría “otros campos” que dan cuenta del creciente interés que representa su abordaje para los y las investigadores de ciencias sociales: este es el caso de las líneas temáticas “feminismo y género”, e “innovación digital/TICS”. Dentro de la primera, podemos mencionar a modo de ejemplo, el proyecto denominado: “diferencias de género en los mercados laborales”. Un ejemplo del segundo caso es el proyecto: “El pensamiento computacional y las prácticas docentes en ciencias”.

Bibliografía

- Accinelli, Adriana y Macri, Alejandra (2015). La creación de las Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense: análisis comparado de dos períodos fundacionales. *Revista Argentina de Educación Superior*, (11), 94-117.
- Alatas, Syed Farid (2014). La dependencia académica: el desafío intelectual. En Beigel, Fernanda y Sabea, Hanan (coord.). *Dependencia académica y profesionalización en el sur: perspectivas desde la periferia*. Mendoza: EDIUNC.
- Albornoz, Mario y Gordon, Ariel (2011). La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983 - 2009). En Albornoz Mario, et al. (eds.) *Trayectorias de las políticas científicas y universitarias de Argentina y España*. Madrid: CSIC.
- Algañaraz, Víctor (2016). Peronismo, dictadura y universidades privadas en la Argentina de los años 70. *Sociohistórica*, 2 (37), 1-22. <https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2016n37a02>
- Algañaraz, Víctor y Bekerman, Fabiana (2014). El préstamo BID-CONICET: Un caso de dependencia financiera en la política científica de la dictadura militar argentina (1976-1983). En Beigel Fernanda y Sabea Hanan (eds). *Dependencia*

académica y profesionalización en el sur. perspectivas desde la periferia (pp. 129-140). Río de Janeiro: SEPHIS - Mendoza: EDIUNC. <https://hear.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2014/12/El-pr%C3%A9stamo-BID-CONICET-Un-caso-de-dependencia-financiera-en-la-pol%C3%ADtica-cient%C3%ADfica-de-la-dictadura-militar-argentina-1976-1983.pdf>

- Artsimuño, Francisco y Aguiar, Diego (2015). Construcción de las políticas de ciencia y tecnología en la Argentina (1989-1999). Un análisis de la concepción de las políticas estatales. *REDES*, 21 (40), 41-80.
- Beigel, Fernanda (2018). "Las relaciones de poder en la ciencia mundial. Un anti-ranking para conocer la ciencia producida en la periferia. *Revista Nueva Sociedad*, (274), 13-28. http://nuso.org/media/articles/downloads/TG.Beigel_274.pdf
- Beigel, Fernanda (2013). Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento. *Nueva Sociedad*, (245), 110-123. https://nuso.org/media/articles/downloads/3944_1.pdf
- Beigel, Fernanda (2019). Indicadores de circulación de la producción científica de las universidades: una perspectiva multi-escalar para visibilizar anclajes locales y promover alcances regionales. *Revista Ciencia, Tecnología y Política*, (3), 01-12. <https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP/article/view/9159/7940>
- Beigel, Fernanda y Bekerman, Fabiana (2019). *Culturas evaluativas: impactos y dilemas del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores en Argentina (1993-2018)*. Buenos Aires: CLACSO / IEC- CONDADU. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191125105317/Culturas-evaluativas.pdf>
- Beigel, Fernanda; Gallardo, Osvaldo y Bekerman, Fabiana (2018). Institutional expansion and scientific development in the periphery. The structural heterogeneity of Argentina's academic field (1983-2015). *Minerva. A Review of Science, Learning and Policy*, 3(56), 305-331.
- Bekerman, Fabiana (2016). El desarrollo de la investigación científica en Argentina desde 1950: entre las Universidades Nacionales y CONICET. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 7 (18), 3-23. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722016000100003
- Bianco, Mariela y Sutz, Judith (2005). Las formas colectivas de la investigación universitaria. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 2(6), 25-44. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92420601>
- Bourdieu, Pierre (2003). *El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad*. Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, Pierre (2009). *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (1995). *Respuestas por una antropología reflexiva*. México: Grijalbo.

- Buchbinder, Pablo (2010). *Historia de las Universidades Argentinas*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Cebrelli, Alejandra y Arancibia, Victor (2017). Los paisajes de la crisis. Los desafíos del campo científico en la Argentina neoliberal. *Cuadernos de ciencias sociales*, 6 (8), 45-59. <http://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/article/view/2369>
- Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (2019). *Radiografía de las Universidades Argentinas*. Rosario: Fundación Libertad. https://libertad.org.ar/web/wp-content/uploads/2019/09/CISE_Radiografia_Universidades.pdf
- CONEAU (1998). Informe de Evaluación Externa Universidad Nacional de Tucumán. <http://www.coneau.gob.ar/archivos/896.pdf>
- CONEAU (2003). Informe de Evaluación Externa Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. <https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/sites/default/files/documentos/Evaluaci%C3%B3n%20Externa%20Convenio%20UNPA-CONEAU.pdf>
- CONEAU (2010). Informe de Evaluación Externa Universidad Nacional de La Plata. http://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/EELaPlata.pdf
- CONEAU (2011). Informe de Evaluación Externa Universidad Nacional del Nordeste. https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/EENordeste.pdf
- CONEAU (2013). Informe de Evaluación Externa Universidad Nacional del Sur. https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/45-NacionalSur.pdf
- CONEAU (2014). Informe de Evaluación Externa: UNSAM. Buenos Aires: CONEAU.
- CONEAU (2020). Informe de Evaluación Externa: UNM <https://www.coneau.gob.ar/coneau/wp-content/uploads/2021/07/EE94-UNM-final.pdf>
- CONICET (2021) Buscador de recursos humanos. Sistema INTRANET. https://www.conicet.gov.ar/new_scp/advancedsearch.php
- Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior [CPRES]. <https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/consejos-regionales-cpres>
- Dagnino, Renato; Thomas, Hernán y Davyt, Amílcar (1996). El pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad en América Latina: una interpretación política de su trayectoria. *Revista Redes*, 3 (7), 13-51. <https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/504/03R1996v3n7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Emirbayer, Mustafa y Johnson, Victoria (2008). Bourdieu and organizational analysis. *Theory Sociology*, 1 (37), 1-44.

- Fuentealba, Andrea; Gajardo, Karen y Alaluf, Lorena (2017). Agendas de investigación en educación: una revisión de artículos científicos publicados en revistas de la Web of Science entre los años 2016-2017. Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación. Buenos Aires. <http://www.saece.com.ar/docs/congreso6/trab049.pdf>
- Gingras, Yves (2016). *Bibliometrics and research evaluation. Uses and abuses*. London: MIT.
- Guedón, Jean Claude (2011). El acceso abierto y la división entre ciencia principal y periférica. *Crítica y emancipación*, (6), 135-180.
- Gutiérrez, Alicia (2005). *Las prácticas sociales: una introducción a Pierre Bourdieu*. Córdoba: Ferreyra Editor.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020). Anuario Estadístico de la República Argentina 2018. Buenos Aires: INDEC. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2018.pdf
- Knorr Cetina, Karin y Cicourel, Aaron (1981). *Advances in social theory and methodology. Toward an integration of micro and macro-sociologies*. Boston: Londres.
- Kreimer, Pablo y Thomas, Hernán (2004). Un poco de reflexividad o ¿de dónde venimos? Estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina. En Kreimer, Pablo et al. (eds.), *Producción y uso social de conocimientos. Estudios de sociología de la ciencia y la tecnología en América Latina* (pp. 11-89). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Mincyt (2020) Sistema integrado de indicadores: <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti>
- Myers, Jorge (1992). Antecedentes de la conformación del Complejo Científico y Tecnológico, 1850-1958. En Oteiza, Enrique. *La política de investigación científica y tecnológica en Argentina. Historias y perspectivas*. Buenos Aires: CEAL.
- OECD (2012). Programme on Innovation, Higher Education and Research for Development. Networking the Knowledge Economy. Research Universities: Boston
- Oregioni María y Sarthou Nerina (2013). La dinámica relación entre CONICET y dos Universidades Nacionales argentinas. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 46, 33-68. http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/spanish/cdt_46/documentos/46_dossier02_oregioni.pdf
- Prado, Flavia (2021). ¿Profesionalización científica o jerarquización académica? *RevIISE - Revista De Ciencias Sociales y Humanas*, (17), 261-284. <http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/573>

- Rikap, Cecilia y Naidorf, Judith (2020). Ciencia privatizada en América Latina. *Conciencia Social*, (3), 57-76.
- Romero, Luis (2019). Informe de evaluación de la implementación del Plan de Mejoramiento de la función I+D de la Universidad Nacional de San Martín. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pm_unsam_evaluacion_de_resultados_romero_lucia_julio_2019.pdf
- Rovelli, Laura (2015). Un modelo para armar: áreas prioritarias e investigación en Universidades Nacionales. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 26 (51), 26-53. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14542676003>
- Ruiz Rivera, Naxhelli y Leopoldo Galicia (2016). La escala geográfica como concepto integrador en la comprensión de problemas socio-ambientales. *Investigaciones Geográficas*, 89, 137-153. <https://doi.org/10.14350/rig.47515>
- Sayre, Nathan (2005). Escala ecológica y geográfica: paralelos y potencial de integración. *Avances en Geografía Humana*, 29 (3), 276-290. <https://doi.org/10.1191/0309132505ph546oa>
- Secretaría de Políticas Universitarias (2021). Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2018-2019. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis_2018-2019_sistema_universitario_argentino_-_ver_final_1_0.pdf
- Senejko, Maria y Versino, Mariana (2019). Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social [PDTs] en la Universidad de Buenos Aires. *Ciencia, docencia y tecnología*, 30, 74-90. <http://www.pcient.uner.edu.ar/cdyt/article/view/688/638>
- Suárez, Diana y Fiorentin, Florencia (2018). *Federalización y efecto mateo en la política científica: el caso del PICT en la Argentina (2012-2015)*. Buenos Aires: CIECTI.
- UNRC (2019). Informe de Autoevaluación Institucional. <https://www.unrc.edu.ar/descargar/informe-autoevaluacion.pdf>
- UNSJ (2011). Informe de Autoevaluación Institucional. San Juan: UNSJ. <http://www.unsj.edu.ar/descargas/InformeFinalAuto.pdf>
- Unzué, Martín y Emiliozzi, Sergio (2017). Las políticas públicas de Ciencia y Tecnología en Argentina: un balance del período 2003-2015. *Temas y Debates*, (33), 13-33. <https://temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/issue/view/30>
- Unzué, Martín y Rovelli, Laura (2017a). Las políticas científicas recientes en las Universidades Nacionales. *Política Universitaria- IEC-CONADU*, (4), 14-23. https://iec.conadu.org.ar/files/publicaciones/1515086540_politica-universitaria-4-2017.pdf

- Unzué, Martín y Rovelli, Laura (2017b). Las políticas científicas recientes en las Universidades Nacionales. *Política Universitaria- IEC-CONADU*, (4), 14-23. https://iec.conadu.org.ar/files/publicaciones/1515086540_politica-universitaria-4-2017.pdf
- Varsavsky, Oscar (1969). *Ciencia, política y cientificismo*. Buenos Aires: CEAL.
- Vessuri, Hebe y Canino, María (2007). Presentación: Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Algunos aportes recientes de la sociología en Venezuela. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 13 (1), 87-90.